

**FRACTURA
EXPUESTA**

Nº4 / Año IV / Septiembre 2015

Horizontes Extremos

crudo en baja / la frontera no para / resistencias



observatorio
petrolero **sur**
soberanía • energía
justicia ambiental



observatorio
petrolero **sur**

soberanía • energía
justicia ambiental

**Arte de tapa,
diseño y diagramación**
dosRíos • diseño & comunicación

Fotos de tapa
Martín Barzilai/Sub.coop
Alexis Vichich y Alianza
Mexicana contra el *Fracking*

Observatorio Petrolero Sur
(+54 11) 4373 6303
contacto@opsur.org.ar
www.opsur.org.ar
FB/ Observatorio Petrolero Sur
Twitter @op_sur
Buenos Aires / Neuquén
Argentina

*Esta publicación es apoyada
con recursos de la FRL con
fondos del BMZ*



Copyright 2014 Observatorio
Petrolero Sur.
Todas las producciones del
OPSur pueden ser reproducidas
y/o modificadas. Agradecemos
mencionar la fuente.

Indice

Nacionales

pgs. 5/8

¿Y si la vaca se cae?

Por Diego Pérez Roig

pgs. 9/12

Añoelo, ¿ciudad emergente y sostenible?

Por Lucile Daumas

pgs. 13/15

Te llevaré hasta el extremo

Por Hernán Scandizzo

Mapa del Fracking

pgs. 17/18

Hidrocarburos y ajedrez geopolítico

Por OPSur

pgs. 19/21

Avance ciego del *fracking* en América Latina

pgs. 22/24

México | Las profundas raíces de la violencia

Por Aroa de la Fuente López

pgs. 25/27

Magreb | Tan cerca de Europa

Por Felipe Gutiérrez Ríos

Alternativas

pgs. 28/30

Es tiempo de crear el grupo Anexo 0

Por Oilwatch

Latinoamérica Debate

pgs. 31/34

Venezuela | Extractivismo y agotamiento del rentismo petrolero

Por Emiliano Terán Mantovani

pgs. 35/38

Brasil | Expansión del presal y soberanía territorial

Por M. Calasanz, T. Gilbertson y D. Meirelles

Editorial

La publicación del cuarto número de la revista nos invita a una reflexión, a mirar el camino recorrido para poder avanzar. La primera edición de *Fractura Expuesta*, en 2012, tuvo como objetivo darle unidad a una serie de artículos sobre la técnica de *fracking* y sus impactos y difundir las experiencias de oposición en Francia y el Reino Unido. No se trataba sólo de un primer acercamiento ante la nueva frontera que el *descubrimiento* de Vaca Muerta anunciaba, era también nuestra respuesta a la necesidad de contar con una herramienta de intervención para promover en el país un debate urgente. La segunda edición, al año siguiente, mantuvo la tónica de reunir notas previamente publicadas y organizarlas bajo un concepto que sintetizara el contexto: *Invasión Fracking*. Salimos a enfrentar la estrategia de *blitzkrieg*, para instalar el *consenso de los no convencionales*, desplegada por empresas, gobiernos y órganos pretendidamente técnicos. En ese número se ahondó tanto en las políticas globales de promoción del *shale* del gobierno de EE.UU., como el rol de Chevron y el Plan Estratégico de YPF, que recientemente había pasado al control estatal. Indagamos en la experiencia de reforma del marco regulatorio de Ucrania para habilitar la explotación de lutitas y seguimos atentos las repercusiones de la prohibición del *fracking* en Francia.

La tercera edición, *Última Gota*, introdujo un elemento nuevo, por primera vez *Fractura Expuesta* fue pensada como una revista, es decir, hubo una discusión del sumario previa a la redacción de las notas. En esa oportunidad el objetivo fue poner a los no convencionales en perspectiva latinoamericana; y al mismo tiempo, a partir del trabajo en conjunto, fortalecer las redes de resistencias tejidas con las organizaciones que hicieron posible ese número. Si Vaca Muerta se había transformado en laboratorio para promover el *shale* en la región, la oposición al *fracking* forjada en la diversidad de organizaciones y espacios, también debía trascender las fronteras nacionales.

En esta oportunidad volvemos con *Horizontes Extremos*, apostando una vez más a que la revista sea una herramienta para el debate y la acción, y también una construcción colectiva. En esta edición ampliamos la mirada hacia la *energía extrema*, sin perderle pisada a los proyectos de lutitas y a las iniciativas nacionales y supranacionales para promover su desarrollo en América Latina. También indagamos en los proyectos de transformación del espacio a partir de la planificación de ciudades funcionales a la explotación de yacimientos no convencionales, y cruzamos el Atlántico para hacer foco en la avanzada *frackinera* sobre el norte de África. Pero creemos necesario mirar más allá del *shale* y de las arenas compactas, ver el bosque y no tan sólo el árbol. Por eso consideramos imprescindible hablar de *energía extrema*. Más allá de las promesas de abundancia con que se promueven los diferentes proyectos, estamos ingresando a un contexto donde la extracción de hidrocarburos entraña mayores riesgos geológicos, ambientales, sociales y económicos.

Nos referimos al avance sobre reservorios poco estudiados, que durante décadas fueron desestimados por diferentes motivos, o incluso por la suma de ellos: se encuentran a grandes profundidades, alojan hidrocarburos de baja calidad, su extracción requiere importantes y exclusivos desarrollos tecnológicos –son técnicas experimentales–, los costos operativos son mayores, en muchos casos los trabajos se realizan en condiciones muy rigurosas –como en el Ártico y las aguas profundas en general, donde las inclemencias climáticas son permanentes. Además, el rendimiento energético cada barril equivalente de crudo de reservorios complejos es cada vez menor, dada la logística e infraestructura que debe desplegarse para su extracción. Y, por otra parte, en la ampliación de la frontera extractiva también se encuentra la profundización, e incluso la causa, de sistemáticas violaciones de los derechos humanos tanto de poblaciones rurales como urbanas y periurbanas.

Si bien el contexto internacional de baja sostenida del precio del barril de petróleo plantea a nivel global interrogantes sobre la viabilidad de proyectos de extracción de *hidrocarburos extremos*, tanto en ámbitos gubernamentales como en sectores empresarios, lejos de dar un golpe de timón, buscan adaptarse al nuevo escenario sin renunciar al gas y al petróleo difícil de extraer. Esta ten-

dencia se manifiesta en Argentina y México, que no pierden el interés en el *shale* y en la insistencia de Brasil, con sus trépanos apuntando hacia los profundos crudos del presal. También se expresa en las campañas exploratorias en aguas profundas que llevan adelante o se anuncian en países como Colombia y Uruguay, incluso en nuestro país, donde las autoridades de YPF y de la Secretaría de Energía de la Nación presentan al Mar Argentino como la *Nueva Frontera*, que albergaría recursos extraordinarios, a pesar de que de no hay certezas respecto del potencial que se le asigna.

A través de las notas que nutren esta edición se van desarrollando diferentes aristas que hacen a la definición del eje temático. En el escenario local analizamos las rupturas y continuidades con el modelo energético neoliberal a partir de la estatización parcial de YPF y de las reformas del marco regulatorio, y la tensión de considerar a los hidrocarburos recursos estratégicos-*commodities*. En este punto quedan planteadas las dudas sobre el futuro de la política energética actual, que apuesta al desarrollo masivo de Vaca Muerta, a pesar de que sea necesario fijar un precio del crudo interno superior al internacional *para poder mantener viva la ilusión de la abundancia*. También subrayamos cómo la reforma del marco regulatorio anticipa el ingreso al *universo extremo*, otorgando excepcionales beneficios tanto a la explotación de yacimientos no convencionales –incluidos los crudos extra pesados– como a los de la plataforma continental; y ante eso, las nulas expectativas que despiertan los candidatos presidenciales con posibilidades de llegar a la Casa Rosada. Todos sostienen un discurso de diversificación energética en abstracto y los escenarios que promueven para complementar a Vaca Muerta no son menos riesgosos que el *fracking*, como es el caso de la gasificación subterránea de carbón.


Los *Horizontes Extremos* de Latinoamérica están contorneados por la violencia alarmante que vive México, donde se reformó profundamente el marco jurídico para viabilizar el desembarco del sector petrolero trasnacional y avanzar sobre yacimientos no convencionales. “Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto (...) vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.”

El dolor mexicano se conjuga con el dilema que se plantea en Brasil a partir del descubrimiento y explotación del presal y que se extiende a todos nuestros países. ¿Se puede prometer la abundancia y el bienestar a partir de recursos cuya explotación implican el cercenamiento de derechos y soberanías de pueblos indígenas y comunidades de campesinos, afrodescendientes y pescadores artesanales? El recorrido en torno a este verdadero hito de la *energía extrema*, se detiene en diferentes aspectos, los desafíos tecnológicos de extraer crudos de aguas ultraprofundas, las reformas del marco regulatorio y las disputas por la renta, las denuncias de corrupción que han abierto una grave crisis política en el país y las resistencias que reclaman el freno de la avanzada extractiva y caminar hacia una sociedad post petrolera.

Las promesas de bienestar ancladas en el potencial de los reservorios presalinos y en las formaciones de lutitas nos invitan a reflexionar sobre la experiencia venezolana, la expansión del modelo de petro-Estado desarrollista y sus males endémicos. Lejos de la panacea, la Revolución Bolivariana enfrenta un importante desafío que se expresa en la tensión entre las estructuras del antiguo modelo petrolero y las diversas experiencias que buscan forjar un futuro más allá del rentismo.

Y en este mar de tensiones para construir otros horizontes, muy diferentes a los extremos, a los hegemónicos, ponemos a discusión la propuesta de *Oilwatch*, la red del Sur Global de resistencia a las petroleras, de cara a la próxima Convención del Cambio Climático que se realizará en París. En lugar de criminalizar y reprimir a quienes intentan frenar la ampliación de la frontera extractiva, se propone el reconocimiento formal y, por ende, el estímulo a los esfuerzos de pueblos y naciones, provincias, estados, regiones y localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo, ya que están resolviendo las causas del problema: la adicción a los combustibles fósiles.

Que sea movimiento.

Por **Diego Pérez Roig***A large, dark, grainy aerial photograph of an offshore oil rig in the ocean. The rig is a complex of structures with a tall derrick in the center. The ocean is dark and textured, and the horizon is visible in the distance under a hazy sky.

¿Y si la vaca se cae?

Fotos Martín Barzilai/Sub.coop.

Desde 2012, con la estatización parcial de YPF, el gobierno apuntaló un modelo energético que, sin chocar frontalmente, marcaba diversas rupturas con el neoliberalismo petrolero. La reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en octubre pasado, intentó abordar el escenario que planteaba el lento desarrollo de Vaca Muerta, se otorgaron mayores beneficios a las empresas del sector, pero también se promocionó fuertemente la recuperación terciaria, la explotación offshore y los crudos ultra pesados como alternativas para incrementar la extracción. Sin embargo, la baja internacional del precio del petróleo amenaza con un prolongado impasse a la piedra angular de esta política: los yacimientos no convencionales. ¿Se abre otro capítulo en la política petrolera?

“Hay optimismo y aceptación general de la situación actual”. Así sintetizó Adil Abdul-Mahdi, ministro iraquí del petróleo, el ánimo reinante en la reunión de la OPEP celebrada en Viena a comienzos de junio. La cotización internacional del petróleo crudo, así como de otros hidrocarburos y derivados, sufrió una estrepitosa caída entre mediados de 2014 y abril de este año. Si bien todavía se encuentra lejos de la anterior franja de US\$ 100-110

nos que desembarcaron en el sector a raíz del *boom* del *shale*. Otros se inclinan por el interés estadounidense de ahogar económicamente a los miembros discolos del cartel –Venezuela, Irán, Ecuador, Nigeria– y dar un tiro por elevación a Rusia. Contaría aquí con la anuencia de Arabia Saudita, inestimable aliado desde las postimerías de la Segunda Guerra Mundial, y el aumento de la tasa de interés de referencia que fija el Comité Monetario de la Reserva Federal de EE.UU., que al revaluar el dólar, repercute no sólo en el precio del petróleo, sino también sobre el conjunto de los *commodities*.

Estos desacuerdos respecto del origen de los movimientos de coyuntura, contrastan, no obstante, con



por barril –¿ni qué hablar de los US\$ 140 de 2008!–, el precio se ha estabilizado entre los US\$ 60-65 y ha traído relativa tranquilidad a los países exportadores. Mientras que varios de los miembros de la organización esperan que continúe ascendiendo hasta alcanzar un *óptimo* de US\$ 80, estimaciones más cautas, como la del Ministro de Energía ruso, prevén una fluctuación entre US\$ 60-70 en los próximos tres años.

A la hora de analizar estos vaivenes, existe relativo consenso respecto de una importante sobreoferta a nivel mundial, aunque el énfasis se ha puesto de manera dispar en una multiplicidad de causas. De un lado, el estancamiento europeo y japonés, el bajo crecimiento estadounidense y la desaceleración de la economía china, implican una menor demanda de energía. Del otro, el masivo desarrollo de explotaciones no convencionales en EE.UU., que redujo a menos de la mitad sus importaciones, se ha combinado con la resolución de la OPEP de no recortar la extracción en el mediano plazo. Algunos analistas vieron en esta jugada la determinación de llevar adelante una guerra de precios contra las (más costosas) explotaciones no convencionales, en la que no sólo ganaría la OPEP, sino las majors de la industria, que sacarían partido de la quiebra de los numerosos y advenedizos capitales pequeños y media-

las certezas que otorga la mirada de largo plazo. Aunque no deben menospreciarse las consecuencias de las fluctuaciones en los precios, la realidad es que estas se producen en el marco de una notable tendencia al alza. Medido a valores de 2013, a lo largo de la historia el precio promedio del barril de petróleo superó los US\$ 100 únicamente en siete oportunidades, de las cuales cuatro corresponden a la última década (1864, 1979, 1980, 2008, 2011, 2012 y 2013). Entre 2000-2013 se ubica en los US\$ 70, mientras que entre 1861-1999 no alcanza los US\$ 30. Así las cosas, no es aventurado suponer que pese a las oscilaciones actuales, o a otras futuras de mayor o menor intensidad, éstos eventualmente encontrarán nuevos puntos de equilibrio que rebasarán los máximos históricos; el problema es cuándo.

¿Se abre un *impasse*?

Recordemos que este notable incremento en el precio de los hidrocarburos durante la década de 2000 es condición *sine qua non* para todas aquellas explotaciones que incorporan una mayor masa de capital –*offshore*, lutitas, *coalbed methane*, arenas bituminosas, etc.–, con el objetivo de ampliar o suplir la oferta que ya no puede obtenerse por métodos convencionales. No es llamativo, pues, que los vaivenes en la cotización

internacional hayan abierto un debate en Argentina acerca de la viabilidad económica de los proyectos que buscan sacar provecho del potencial de Vaca Muerta y otras formaciones geológicas.

En este respecto, la paradoja es que aquellos actores que ayer se oponían fuertemente al desacople de precios internos e internacionales impuesto por los derechos de exportación –fundamentalmente empresas y gobiernos provinciales–, hoy presionan por el mantenimiento de una cotización artificialmente alta en el mercado local. Desde que interviene directamente en el sector a través del control de YPF, el Gobierno Nacional no hace oídos sordos a este tipo de reclamos. Por este motivo, mientras saca provecho del menor costo de la importación de combustibles, reduce sólo moderadamente la cotización del barril de las variedades de crudo Medaño y Escalante, e implementa un subsidio estímulo a la extracción y exportación. **¿Hasta qué punto puede garantizarse la rentabilidad de las inversiones en Vaca Muerta, sin comprometer el frente fiscal ni la competitividad de la economía en su conjunto?**

En febrero, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, evaluó esta situación como coyuntural –“si pensara que el precio se va a quedar en US\$ 50 en los próximos veinte años, tendríamos que bajar la persiana en el no convencional”– y pronosticó que en el corto o mediano plazo el barril volvería a acomodarse por encima de los US\$ 84. Sin embargo, en los últimos meses YPF avanzó en una reestructuración de sus operaciones en el área Loma Campana, con el objetivo de incrementar la cantidad de pozos y su *productividad*, así como de reducir costos en términos de equipos, infraestructura y contratación de servicios. Se percibe que **esta situación internacional, desde ya ingobernable, amenaza con colocar en un (¿prolongado?) impasse al conjunto de condiciones que, desde 2012, se vienen generando a nivel local con el objetivo de disipar la explotación de no convencionales.**

Luego de la recuperación del control de YPF, se logró un primer acuerdo con Chevron, *socio shale* de inestimable aporte en términos de financiamiento, capacidad de gestión y *know how*. Meses más tarde, el Gobierno Nacional llegó a un entendimiento con Repsol por la expropiación de acciones de YPF, que puede entenderse, valoraciones al margen, como un intento de *normalizar* las relaciones con el sector y facilitar el acercamiento de nuevos socios. El acuerdo con Chevron estuvo enmarcado por la creación de un nuevo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (decreto 929/13), que dispuso una serie de beneficios¹ para aquellos titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, que presentaran un proyecto de inversión para la extracción de hidrocarburos con un desembolso mínimo de US\$ 1.000 millones en los primeros cinco años.

Por su parte, desde el punto de vista político, el acuerdo YPF-Chevron requirió sendos entendimientos de Neuquén con la empresa argentina y con el Gobierno Nacional. La provincia, que detenta el dominio originario de los recursos, avaló las condiciones del decreto 929/13 y se comprometió a mantener las regalías en el orden del 12% hasta el año 2048 (que surge del plazo de vigencia de la concesión y su prórroga); a no gravar a la empresa con nuevos tributos, renta extraordinaria ni “Canon Extraordinario de Producción”; y a permitir que la propia YPF actúe dentro un equipo de trabajo que facilite las tareas de fiscalización ambiental y de inversiones, que competen a la autoridad de aplicación –además, YPF podrá ceder todos estos derechos y obligaciones a otro cesionario. Por último, de no llegar a un entendimiento en caso de controversias, sería inapelable el arbitraje de acuerdo a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

A cambio, Neuquén logró el compromiso de un plan de obras públicas por \$ 1.000 millones, que sería financiado por la Nación. Este ítem, que apunta a generar consenso en los departamentos con mayor impacto por la actividad hidrocarburífera, contrasta notablemente con la brutal represión que sufrió, el día de la votación en la Legislatura provincial, una manifestación de 5 mil personas –integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de pueblos originarios– opuesta al acuerdo, que derivó en un herido por balas de plomo.

Finalmente, desde el punto de vista macroeconómico, el impulso a la explotación de no convencionales propició cambios en el sistema de retenciones (resolución 1/13 del Ministerio de Economía de la Nación), que actualizaron el *valor de corte* que el productor recibe por cada barril exportado y el precio de referencia internacional a partir del cual se aplica el gravamen. De esta manera, el Estado nacional aceptó resignar parte de sus ingresos por retenciones en relación a las alícuotas anteriores y tendieron a equipararse los niveles de rentabilidad entre el petróleo de exportación y el destinado al mercado interno. Asimismo, se incrementó el precio del millón de BTU de gas en boca de pozo y se permitió un importante aumento de los combustibles, que desde mayo de 2012 acumulan subas superiores al 100%.

La contradicción *commodities*/ recursos estratégicos

Lo que el contexto internacional pone en cuestión, en realidad, es la posibilidad misma de sostener las premisas básicas que orientan el actual modelo petrolero. La ley de *soberanía hidrocarburífera* de mayo de 2012, dictaminó como principio rector general de la política a implementar en el sector **la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos**, (supuestamente) imprescindibles para un desarrollo socioeconómico armónico, equitativo y sustentable. Por este motivo, la actividad hidrocarburífera se conceptualiza como de *interés público nacional*, quedando a cargo del Estado “el autoabastecimiento en materia de combustibles

[que] contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país”. Para ello se estableció la utilidad pública y la expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A., hasta ese momento en manos de Repsol. Este cambio, así como la reafirmación del Poder Ejecutivo como la “autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia”, son indicativos de un intento de *re-centralización* del diseño y la implementación de la política hidrocarburífera, que inevitablemente choca con lo establecido constitucionalmente a partir de 1994 y la provincialización consolidada durante los 2000, aunque lo revierte solo parcialmente.

Sin embargo, **este sentido estratégico de los hidrocarburos² quedó enfrentado contradictoriamente con un resurgido criterio mercantil**, que es expresión de otros de los principios rectores de la ley: “la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos”; la continuidad de YPF como sociedad anónima abierta; la preservación de los intereses de los accionistas “generando valor para ellos”; y, en menor medida, la promoción de asociaciones con otras empresas -que pueden ser públicas, pero también “privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.

¿Cómo lograr el autoabastecimiento en un país cuyos campos petroleros más importantes se encuentran maduros y en franca declinación? ¿Cómo compatibilizar este objetivo, a su vez, con la “obtención de saldos exportables”? Está claro que **la única posibilidad de suturar esta contradicción descansa sobre la supuesta riqueza de Vaca Muerta** y otras formaciones geológicas. Un potencial ahora puesto en duda por la caída de los precios y que, hasta el momento, sólo avalan estimaciones hechas por organismos gubernamentales extranjeros y una ínfima certificación de reservas sobre el total de recursos proyectados.

Esta creciente incertidumbre fue el trasfondo de la aprobación, en octubre de 2014, de una nueva ley de hidrocarburos presentada en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos de la norma reaparecen el sentido estratégico del petróleo y el gas, con énfasis en la necesidad de lograr el autoabastecimiento³, y el interés por aprovechar estos recursos en cuanto *commodities* capaces de aportar equilibrio al sector externo. La ley continúa colocando a las “explotaciones no convencionales de hidrocarburos” como centro de la ecuación energética en el mediano y largo plazo. En este sentido, se amplían los plazos de exploración; se permite la subdivisión de áreas y su re-concesión como explotaciones no convencionales, previa solicitud del concesionario, por un plazo de 35 años prorrogable por 10 más; se establece un tope para el cobro de cánones y regalías; se ratifica la libre importación de bienes de capital e insumos imprescindibles para las operaciones, dispuesta por el decreto 927/13; se flexibilizan las condiciones de incor-

poración al régimen promocional creado por el decreto 929/13 –al disminuir la inversión mínima a US\$ 250 millones– y se reduce el tiempo para la percepción de sus beneficios de cinco a tres años.

Lo más llamativo, no obstante, es que **también se regimientan e incorporan importantes estímulos para otro tipo de explotaciones**, definidas como proyectos de **producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera (*offshore*)**. Además de compartir varios de los beneficios anteriores, se contempla la posibilidad de que en estos casos, por su productividad, ubicación y características técnico/económicas desfavorables, la autoridad de aplicación correspondiente reduzca hasta en un 50% el cobro de regalías. Las explotaciones *costa afuera*, particularmente, contarán con permisos de exploración de idénticos plazos a las no convencionales, plazos de concesión por 30 años –prorrogables por 10 más–, y la posibilidad de exportar libremente un 60% de lo extraído a partir del tercer año, en caso de que la inversión hubiera alcanzado un mínimo de US\$ 250 millones.

Todo un indicio, en definitiva, de que ante un panorama internacional que coloca entre signos de pregunta a las explotaciones más costosas, quizá sea necesario **ampliar la oferta de hidrocarburos** priorizando campos que llevan varias décadas de explotación y/o apurando la expansión de la *frontera hidrocarburífera* hacia el mar. Un escenario semejante, en el que podría reducirse significativamente el potencial de recursos a extraer, **¿precipitará un nuevo capítulo del dilema político recursos estratégicos-commodities?** En suma, ¿empujará a una redefinición más profunda del *modelo petrolero* que la intentada a partir de 2012?

* Diego Pérez Roig. Politólogo. Integrante del OPSur e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

1. Una vez cumplidos los primeros cinco años, podrían exportar el 20% de lo extraído sin pagar retenciones y tendrían la libre disponibilidad del 100% de las divisas que obtuvieran. En caso de que estos volúmenes debieran destinarse al mercado interno para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento, igualmente gozarían de un precio no inferior al de exportación, que si bien se pagaría en pesos, también podría convertirse a divisas de libre disponibilidad. El régimen también contemplaba la solicitud de recategorización de los bloques (o fracciones) como “concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos”, con una extensión mínima de 25 años, prorrogables a 10 más de forma anticipada.

2. Dos meses más tarde, el decreto reglamentario 1277/12 del 25 de julio, reafirmó los principios más disruptivos la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Así, se puso fin a la “libre disponibilidad” que se arrastraba desde las primeras reformas neoliberales y se intentó institucionalizar una mayor planificación y gestión a nivel nacional de los segmentos del sector.

3. El petróleo y el gas “resultan en la actualidad la principal fuente energética, y consecuentemente [recursos trascendentales] en la estructura económica y de desarrollo para dicho crecimiento, resultando necesario fortalecer la promoción de la inversión destinada a la explotación de hidrocarburos”. La política de autoabastecimiento debe incrementar la producción propia “como recurso estratégico”, para reducir la dependencia del petróleo importado, acumular stocks de crudo, e implementar mecanismos que “permitan sobrellevar las fluctuaciones de los precios del petróleo a nivel internacional”.

Añelo, ¿ciudad emergente y sostenible?



¡Qué bonito se ve Añelo, con sus casas dispersas entre jardines y alamedas, en el folleto *Añelo Sostenible*, publicado por la Fundación YPF (FYPF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)! Pero ¿por qué este pueblo, ubicado a pie de meseta en la Patagonia Norte, en territorio histórico mapuche, llegó a sumarse a la *Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles* (ICES) implementada a nivel latinoamericano para ciudades de mayor importancia? Es que Añelo conoce un desarrollo acelerado: de 75 habitantes, en 1970; pasó a 412, en 1980; 2.689, en 2010; unos 6 mil, en 2015; y se calcula que para 2030 será una ciudad de 30.000 habitantes. Este crecimiento se sustenta en la extracción de gas y petróleo que comenzó hace casi un siglo en la provincia de Neuquén y se aceleró en el caso de Añelo en la década de 1990 y 2000. Sin embargo, el verdadero *boom* llegó con el *descubrimiento*, en 2010, de enormes recursos de gas y petróleo no convencionales en la formación Vaca Muerta, cerca de la localidad.

La cuestión que se plantea es **cómo pensar el paso de un pueblo** que vivió de la actividad agropecuaria y del empleo en el sector público y de servicios, **a una ciudad de 30 mil habitantes, capital latinoamericana del petróleo y gas de lutitas**. Ahí es donde aparece el proyecto *Añelo sostenible, innovación para la planificación de la ciudad*. Experiencia *piloto* para crear no una *company town*¹ sino pensar la ciudad petrolera “moderna, sostenible y próspera”, según el documento BID /FYPF (2014: 11). Desafío que la localidad neuquina comparte con Las Heras, que tiene 18 mil habitantes y está ubicada en la provincia de Santa Cruz, también en la Patagonia.

Desequilibrios

Evidentemente es oportuno preparar el futuro y anticiparse a los problemas antes que ocurran. Ahora bien, en el caso de Añelo no se trata del futuro: el conjunto de los desequilibrios están presentes después de más de 25 años de explotación petrolera, y bien poco se ha hecho para acompañar el crecimiento inicial de este pueblo. La novedad es que el *boom* de la fractura hidráulica, método utilizado para extraer los hidrocarburos no convencionales, va a acentuar los problemas existentes porque necesariamente supone mano de obra más abundante e impactos ambientales más agudos, en una industria cuya condición de rentabilidad mínima se basa en la explotación masiva. Además de un acelerado crecimiento demográfico, se va a profundizar el desequilibrio de género, que acompaña a este tipo de actividad, altamente masculina hasta ahora.

Con sus barrios de tráiler, Añelo ya es una *company town*. A sus 6.000 habitantes actuales, muchos de ellos de instalación reciente, hay que añadir los 4 ó 5 mil trabajadores que viajan diariamente desde otras localidades. Además de la falta de viviendas, la gran disparidad entre los ingresos de los sectores agropecuario, público y de servicios, con los abultados sueldos de los trabajadores relacionados directa o indirectamente con la explotación petrolera ha provocado un alza generalizada del costo de vida –alquiler, alimentos, etc.– que hace imposible a los primeros vivir en el pueblo. Por eso es una ciudad de hombres que trabajan duro, disponen de dinero, y lo gastan en el casino –el aporte del rubro juegos de azar al presupuesto municipal no es despreciable²–, además el consumo de alcohol y

Por Lucile Daumas*

drogas y la prostitución se han incrementado masivamente³. Ante este conjunto de problemas, la expresión “ciudad sostenible” parece ilusoria, tratándose además de una ciudad totalmente vinculada al auge e ineluctable futuro declive de la extracción de petróleo y gas no renovables, y altamente contaminantes.⁴

Veamos de qué se trata este proyecto. La ICES, surgida en 2010, es un programa del BID cuyo objetivo inmediato es “contribuir a la sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y de gobernabilidad de las ciudades de la región” (BID, 2014: 11). Destinada a urbes de tamaño intermedio, como Valdivia (Chile), Cochabamba (Bolivia), Paraná y Salta (Argentina), entre otras, Añelo y Las Heras son una extensión de esta iniciativa, que en este caso se aplica a ciudades emergentes con el *boom* petrolero (BID, s/d). La guía metodológica fue diseñada por McKinsey, multinacional de la consultoría, conocida por trabajar para las principales transnacionales y asesorar a unos 50 gobiernos en la implementación de políticas elaboradas por instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Esa guía única, válida

“detectar y jerarquizar las oportunidades y debilidades que la inversión privada evalúa en torno al desarrollo urbano de la ciudad” (BID/FYPF, 2014: 26). Mientras tanto, los habitantes de Añelo sólo fueron consultados en una encuesta de opinión y se realizó un taller de presentación del proyecto. Así es cómo el desarrollo es planificado por un banco, una empresa petrolera y el sector privado, con la colaboración de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Cabe preguntarse si son esas las entidades más pertinentes a la hora de diseñar la *ciudad piloto* que se pretende realizar.

¿Qué proyecto de ciudad?

La verdad es que decepciona ver la realidad del proyecto, que se resume en la realización de infraestructuras básicas: extensión de las redes de electrificación, agua y cloacas, loteos para viviendas y parque industrial, construcción de una comisaría, un nuevo edificio municipal, un hospital, una escuela de formación técnica, un matadero, un polideportivo y pileta cubierta, obras viales, ampliación de las escuelas existentes y creación de algunos parques. Esperando que no pase con estos proyectos lo que pasó con el hospital, cuya construcción estaba prevista en el presupuesto 2009 de Neuquén, pero fueron necesarios cortes de ruta en diciembre de 2013 para que el gobierno provincial cumpliera sus promesas... en noviembre 2014.



Fotos Martín Barzilai/ Sub.Coop

para cualquier ciudad, en cualquier país, reproduce ese esquema neoliberal que las mismas políticas se deben implementar de la misma manera en el mundo entero.

En el caso de Añelo y Las Heras, el BID y la Fundación YPF firmaron un acuerdo para implementar conjuntamente esta metodología, profundizando asimismo, la dependencia del desarrollo de dichas ciudades a la actividad petrolera de la zona y el protagonismo corporativo en el diseño de la *futura ciudad*. Por si no fuera suficiente, se reforzó este abordaje al constituir grupos focales de empresarios con el fin de

Bajo el título de “crecimiento urbano inteligente”, no aparece ninguna reflexión de fondo ni propuesta para dar solución a los desequilibrios actuales y venideros. ¿Cómo frenar el alza de los precios de los terrenos y de la vivienda para permitir la cohabitación de ciudadanos con recursos muy desiguales? Por lo contrario, se implementa una política de densificación del suelo urbano y abandono de los jardines y huertos que conformaban el hábitat tradicional del pueblo: “el análisis de la huella urbana realizado permitió descubrir que prevalece una densidad de población muy ba-

ja, destacando la preferencia local de construcción de viviendas unifamiliares en lotes amplios. El resultado es una expansión de la huella urbana sin planificación, con una tendencia insostenible” (BID/FYPF, 2014: 28).

Con el discurso de sostenibilidad se justifica una política de densificación de la construcción, con propuesta de viviendas de varios pisos o de lotes de 60m² que no podrá sino acelerar la especulación y obligar al abandono definitivo de los modos de vida anteriores que siguen teniendo “la preferencia local”. Así lo resume Valeria Petrini, del Colegio de Arquitectos de Neuquén: “En la actualidad, la tendencia regional en el crecimiento urbano está ligada al factor económico y ello está proyectando el valor de tierra en vez del espíritu de transformar ciudad, desarrollando ejes y mejorando sectores degradados. (...) El mercado inmobiliario busca imponer una tendencia que, urbanísticamente, puede ser la menos apropiada” (ARQA, 13/05/2014).

Si bien se acaban de construir dos viviendas para que los médicos se radiquen en el pueblo donde “la tierra vale más que en Puerto Madero”, ¿qué pasa con los maestros y demás trabajadores del resto del sector público? ¿Seguirán viviendo en Centenario (a 85 km) o Neuquén (94 km) y haciendo dedo para compensar un sistema de transporte poco eficiente y costoso? Tampoco hay reflexión alguna sobre la especificidad del paso de un pueblo rural a una ciudad vinculada a un

mundo (Bercovich y Rebossio, 2015: 304). También se plantea abandonar el sistema de cría extensiva actual para pasar a uno de ganadería intensiva, en corral, que, más allá de la mala calidad de carne que produce y la alta contaminación que conlleva, será una puerta abierta a inversores que dejarán a los actuales pequeños productores fuera de la competencia.

Es muy contradictoria también la visión que se tiene del uso de la tierra: mientras se van concediendo a las empresas petroleras miles de kilómetros cuadrados de territorio sin tener en cuenta ni las comunidades instaladas, ni sus producciones agrícolas y ganaderas, ni menos aún sus derechos como comunidades originarias, a la hora de pensar la ciudad, sólo se lo hace en términos de densificación y ahorros de suelo y de metros de cañerías, cableado y canalizaciones.

Insostenibilidades

A la ausencia de reflexión y visión prospectiva, se suma una falta total de respuestas a las insostenibilidades ya presentes en el pueblo.



proyecto extractivo, y la manera de integrar dos poblaciones con orígenes y actividades bien distintas. Por ejemplo, ¿cómo pensar una integración rural/urbana en términos de producción agropecuaria para satisfacer, con productos locales, parte de las necesidades de la nueva ciudad? Se habla de mejorar la competitividad de la agricultura, pero al mismo tiempo se regalan 9 hectáreas a un empresario privado para construir supermercados y demás emprendimientos comerciales, que van a funcionar con los mismos productos que esas redes suelen traer de otras partes del país y del

A nivel ambiental, varios problemas saltan a la vista:

- La Ruta Provincial N° 7 no sólo divide el pueblo en dos, por la densidad del tráfico que tiene de autos y tránsito pesado, sino que conlleva riesgos de accidentes importantes y es una fuente de contaminación ambiental y sonora insostenible. Aun así, no se ha priorizado la construcción de una circunvalación, que quedó como proyecto a mediano y largo plazo (BID/FYPF, 2014: 52 y 60).

- Se ha instalado un repositorio de sólidos contaminados en la meseta, a dos pasos del loteo de viviendas

Añelo II. Cuenta con una pileta de residuos líquidos a cielo abierto, infringiendo la ley provincial al respecto. Supone además un importante tránsito de camiones llevando los materiales contaminados, que circulan, incluso, en contenedores no cerrados herméticamente, como lo establece la legislación provincial (Bercovich y Rebossio, 2015: 296). Este punto es un evidente problema de riesgo de contaminación ambiental que no está tomado en cuenta en el proyecto Añelo sostenible.

- A esto hay que añadir la contaminación generada por los pozos que se van a ir multiplicando en los próximos años, de los 300 actuales a unos 1000 en un futuro próximo, y que, según Darío Díaz, “desde la urbanización nueva arriba de la barda hasta los pozos más cercanos va a haber apenas 300 metros” (Bercovich y Rebossio, 2015: 294).

Cabe subrayar que si bien se contemplan los riesgos de deslizamiento de suelos a pie de barda e inundaciones, no son tomados en consideración los relacionados a la extracción petrolera (emisiones, escapes de gas, derrames, explosiones, contaminación del suelo y de las aguas), como si no existieran. Eso podría explicar por qué el servicio de agua potable ha sido identificado como el principal problema para la población de Añelo (BID/FYPF, 2014: 73).

A nivel socioeconómico, el intendente Darío Díaz *recorre el mundo*, declarando: “Voy pensando en lo que mi ciudad y mi gente necesitan y por ello es que quiero atraer inversores de todas las ramas de la actividad económica. No solo petroleras sino hoteleras, gastronómicas y de infraestructura en general” (*Shale Seguro*, 03/06/2014). Por ahora, no es tan difícil, la capital argentina del *shale* atrae a quien quiera construir un hotel, un casino, un supermercado, porque sabe que el pueblo va a crecer y que el dinero está circulando. Pero no se trata tanto de una diversificación económica sino de los efectos inducidos por la actividad petrolera, que irán creciendo y decreciendo al ritmo de ésta.

Estamos aquí ante la misma falta de reflexión y creatividad apuntada anteriormente. Hay que reconocer que es difícil promover emprendimientos que posibiliten generar salarios o ingresos que puedan competir con los del sector petrolero y permitan sobrevivir en una ciudad donde los precios se disparan. Buena parte de la gente está dispuesta, incluso, a abandonar su trabajo actual por un empleo en una empresa relacionada con los hidrocarburos. La ciudad se ha vuelto insostenible para el *ciudadano de a pie*. Y en vez de buscar alternativas y contrapesos, se piensa la ciudad para los que puedan pagar. El intendente lo reconoce cuando declara: “Cuando vos vas a desarrollar una ciudad, tenés que abrirla a todo el mundo, pero especialmente a los que tienen el poder adquisitivo, que son los que van a traer los servicios” (Bercovich y Rebossio, 2015: 290).

Añelo emergente y sostenible aparece pues como un loable intento de ofrecer a la futura ciudad los servicios e infraestructuras básicas. Ahora bien, no se trata de ningún proyecto revolucionario. Nada de barrios ecológicos o de casas energéticamente eficientes, nada de urbanismo apuntando a una nueva calidad de vida, **nada de gestión urbana democrática y participativa. No por nada fue elaborado por un banco, la fundación de una empresa petrolera y una consultora multinacional.** La *Nueva Añelo* “tiene como meta configurarse como una plataforma urbana innovadora que incorpore la participación de los procesos de planeamiento y potencie la naturaleza competitiva de su economía” (BID/FYPF, 2014: 28). **El proyecto de ciudad carece de cualquier reflexión de sostenibilidad, tanto a nivel económico como social y ambiental.** Su única visión es tener mano de obra a disposición, ofreciéndole perspectivas de consumo con *shopping*, casino y supermercados. Y abrir ese mercado a la inversión privada. El término “sostenible” aplicado a Añelo es totalmente “gelatinoso”, vaciado de todo contenido. Y es de temer que, cuando se acaben las reservas fósiles o se haga demasiado cara la extracción de lo que quede, se vuelva un pueblo fantasma.

* Miembro de las redes Attac y CADTM

1. Las company town son ciudades diseñadas para atender funciones productivas, residenciales y de equipamiento, con el propósito de alcanzar resultados de eficiente producción en torno a una empresa o industria en particular.
2. En el presupuesto 2015 el rubro juegos de azar aportaría a las arcas municipales \$3,1 millones, que permitirían remodelar el Centro de salud y habilitar un espacio público (Espacio central Av.14. Tamuz).
3. Bercovich y Rebossio calcularon en unas 50 las personas que ejercen la prostitución en la ciudad. (2015: 191-192 y 372).
4. Una abundante literatura trata de este tema. Léase por ejemplo di Risio et al. (2012). Zonas de sacrificio, impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia. América Libre, Buenos Aires; o Bertinat et al. (2014). 20 mitos y realidades del fracking, Editorial El Colectivo. Buenos Aires.
5. La expresión es de Eduardo Gudynas, aplicándola al término “desarrollo”.

Fuentes consultadas

- Ambito.com (23/09/2014) “La tierra vale más en Vaca Muerta que en Puerto Madero”.
- ARQA -Valeria Petrini- (13/05/2014). Las nuevas ciudades petroleras y los desafíos urbanos de siempre.
- Banco Interamericano de Desarrollo (s/d). Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2014). Guía Metodológica ICES. 2da. Edición.
- Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación YPF (2014). Añelo sostenible, innovación para la planificación de la ciudad.
- Bercovich, A. y Rebossio, A. (2015). Vaca muerta, el sueño de un boom petrolero argentino: una investigación entre Texas y Neuquén. Planeta, Espejo de la Argentina. Bs. As.
- Río Negro (14/07/2014). Efecto Vaca Muerta: Añelo duplica su población en horas laborales.
- Shale Seguro (03/06/2014). Añelo mostró en Rusia el fenómeno del shale en Argentina.
- YPF (s/d): Recursos No Convencionales.

Te llevaré hasta el extremo

Los excepcionales beneficios otorgados a proyectos para explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales y plataforma continental confirman que los hidrocarburos fáciles de extraer se agotaron en el país. Ante esto, los candidatos presidenciales con posibilidades de llegar a la Casa Rosada repiten un discurso de diversificación energética en abstracto. Los escenarios que buscan complementar a Vaca Muerta no son menos riesgosos que el fracking, tanto en términos ambientales, sociales y financieros.

Por **Hernán Scandizzo***

A pesar del relato épico que alimenta percepciones asociadas al bienestar y la abundancia, el fin de los hidrocarburos fáciles de extraer es un hecho asumido por la dirección de YPF y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, al plantear que los crudos pesados, los hidrocarburos de formaciones compactas y los de aguas profundas son su horizonte de conquista. Por otra parte, a pesar de que los candidatos con posibilidades de suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada mencionan la diversificación de la matriz energética como una necesidad, mantienen como norte la exploración y explotación de cuencas de frontera –onshore y offshore– y no desplazan a Vaca Muerta de su sitio. Tampoco aclaran qué entienden por diversificación, dado que por ejemplo, Franco La Porta, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y referente de Daniel Scioli en materia energética, promueve como alternativa la gasificación subterránea

de carbón en la Cuenca Claromecó.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos en 2014 no sólo incorporó beneficios para el desarrollo de yacimientos no convencionales sino también para proyectos de recuperación terciaria, *offshore* y crudos extra pesados, en consonancia con la estrategia de producción y *visión exploratoria* diseñada por la conducción de YPF.¹ Estos cambios, que pueden ser interpretados como un intento de **acelerar el lento desarrollo Vaca Muerta y la *galaxia shale***, atrayendo nuevos inversores, y **promover vías rápidas para sostener los niveles de extracción**, a través de proyectos de recuperación terciaria y de explotación de arenas compactas; **en realidad anuncian el ingreso de Argentina al universo de *energía extrema***. Un contexto donde la extracción de hidrocarburos entraña mayores riesgos geológicos, ambientales y sociales, debido a que no siempre se tiene un acabado conocimiento de las formaciones a intervenir, las técnicas que se aplican –general-

mente- son experimentales y las condiciones operativas muy rigurosas. Además el costo financiero es más elevado y la tasa de retorno energético más baja, dado que la extracción de cada barril demanda más energía.²

Aunque tanto desde la petrolera de bandera, ámbitos técnicos y políticos también se alimenten expectativas en torno al descubrimiento de yacimientos convencionales en cuencas productivas –fundando sus escenarios en campañas exploratorias más exhaustivas–, el interés en estos remanentes, al igual que en el rejuvenecimiento de yacimientos maduros (recuperación mejorada)³, radica más en la posibilidad de incorporarlos rápidamente al mercado –debido a que existe la infraestructura y logística para hacerlo– que en la probabilidad de que acontezcan importantes hallazgos. Por otra parte, tras la euforia de 2012, y a pesar de las políticas de estímulo al sector y reformas normativas, la *galaxia shale* quedó reducida a Vaca Muerta. Los avances sobre cuencas de frontera, como la Chaco-paranaense, e incluso el promocionado lanzamiento de la formación de lutitas D-129 en Chubut, con la televisación del inicio de la perforación del pozo El Trébol, pasaron a un segundo plano. Lo mismo sucedió con el fugaz interés por los crudos extra pesados de Llancanelo, en Mendoza. Si conseguir financiamiento para un rápido y masivo desarrollo de la formación insignia constituye un obstáculo difícil de sortear, mejor no puede ser la suerte de las otras, supeditadas al devenir de la Cuenca Neuquina.

Pese a reconocer estas dificultades, Miguel Galuccio, CEO de YPF, continúa aferrado a la convicción de que el *tight* y el *shale* representan el futuro. “El desarrollo del primero está mucho más avanzado, pero el *shale* es muy promisorio. Por eso

prevemos que en 2020 el *tight* equivalga al 28% de la producción de gas, el *shale* contribuya con un 26% y la producción adicional de reservorios convencionales con otro 20%” (Petroquímica, 26/05/2015 y El Inversor Online, 06/08/2015).

En tanto las empresas del sector consideran que la explotación de arenas compactas es el puente entre los yacimientos convencionales en declinación y la explotación del *shale* gas, mucho más costosa. Destacan que éstas cuentan con algunas ventajas: se trata de formaciones conocidas –estudiadas para la explotación de reservorios convencionales– y que el Plan Gas –que fija en 7,5 dólares el millón de BTU– garantiza una rentabilidad que se acerca a la que buscan (Petroquímica, 26/05/2015). Este interés por el *tight* se verifica en el Alto Valle de Río Negro y en la provincia de Neuquén, donde se han incrementado los proyectos tanto de YPF y su subsidiaria YSUR como de Pan American Energy (PAE), Total, Pluspetrol y Petrobras.

Un mar de dudas

“La exploración en aguas profundas en la Argentina tiene el potencial de ser el único remanente en reservorios convencionales con grandes cantidades de petróleo y gas. YPF iniciará la exploración en Cuenca del Colorado y del margen norte de la Plataforma Continental Argentina. Además, nos proponemos relanzar la exploración en las cuencas Austral y Malvinas”, asegura la petrolera de bandera en la *Visión Exploratoria* publicada en su web. Si bien lo presenta como un objetivo a largo plazo, el vicepresidente ejecutivo de *Upstream* de YPF, Jesús Grande, asegura que “el mar es la próxima frontera a la que hay que tratar de aspirar”. Desde la conducción de la compañía afirman que la plataforma continental ofrece un millón de kilómetros cuadrados sin explorar, de los cuales 600.000 probablemente sean prospectivos. “Estimamos recursos en el mar por 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. Es decir, volúmenes de una magnitud similar a la que encontramos en

el No Convencional en la Argentina, pero con un riesgo bastante más elevado por la falta de información absoluta”, reconoció el ejecutivo de la petrolera de bandera (El Inversor Online, 11/05/2015 y Petroquímica, 26/05/2015 y 13/07/2015).

La visión del mar como la *Nueva Frontera*, con mayúsculas, está en sintonía con la tendencia global que avanza sobre los crudos de las profundidades del presal o los de las gélidas aguas del Ártico, entre otros *horizontes extremos*.⁴ En el caso argentino, el objetivo es el área Colorado Marina, frente a las costas bonaerenses, cuya concesión la compañía de mayoría estatal comparte con Petrobras, Petrouuguay (subsidiaria de Ancap) y Enarsa. Cuando YPF todavía era controlada por Repsol se proyectó la perforación de un pozo exploratorio cuya profundidad final se estimaba en 3600 metros, de los cuales 1600 corresponderían a la columna de agua. La iniciativa luego fue desestimada por las bajas posibilidades de éxito y el alto costo: US\$ 200 millones. Si bien para el comienzo de esta nueva campaña debería resolverse primero la participación de Enarsa en el consorcio, dado que a partir de la reforma de la Ley de Hidrocarburos esta sociedad anónima controlada por el Estado debe revertir sus permisos y concesiones en la plataforma continental, YPF apuesta a retomar la exploración en 2016.

Respecto al promisorio horizonte que yacería bajo aguas profundas, el geólogo Daniel Kokogian, presidente de la consultora New Milestone, aseguró hace un lustro que el potencial exploratorio está enmarcado en un ambiente de alto a muy alto riesgo y “los posibles recursos, sumados a los datos existentes, no parecen ser tan obvios ni estar en los rangos que suelen

discutirse en público”. “No parece prudente hacer descansar las expectativas de autosuficiencia energética en las supuestas bondades aún no descubiertas ni comprobadas del subsuelo del Mar Argentino”, afirmó en un extenso artículo publicado en la revista del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (Petrotecnica, diciembre 2010). Las campañas *offshore* en Argentina comenzaron en la década de 1960, sin embargo la producción se inició en 1989, a partir del desarrollo del yacimiento Hidra, por parte de Total, y se consolidó en 2005 con la puesta en *producción* de Carina y Aires, yacimientos también ubicados en la Cuenca Austral Marina, frente a las costas de Tierra del Fuego. Según datos de la Secretaría de Energía, los reservorios *offshore* actualmente aportan el 2,8% de la oferta total de petróleo y el 17,4% de la de gas.

El primer pozo exploratorio en aguas profundas se perforó en la Cuenca Malvinas a fines de 2010, el cual superó los 2 mil metros, sin registrarse la presencia de hidrocarburos. En aquella oportunidad se invirtieron más de 150 millones de dólares. Un dato aportado por YPF y subrayado en las crónicas periódicas fue que los trabajos se realizaron bajo condiciones climáticas absolutamente hostiles: con vientos de casi 180 kilómetros por hora y olas de 8 metros de altura (MDZ, 06/07/2011). Por otra parte, y en relación a las cuencas sedimentarias del extremo sur de América, si bien a principios de 2015 se anunciaron importantes descubrimientos de crudo y gas en Malvinas Norte, en zona de usurpación británica, éste sería el primer indicio del potencial que se le adjudica a la plataforma continental. La información surge de las restantes campañas exploratorias realizadas en diferentes cuencas aledañas a las islas lejos estuvo de certificar la existencia de

Claromecó, la frontera del carbón

A fines de 2014 el secretario de Servicios Públicos bonaerense, Franco La Porta, había asegurado que el gobernador Daniel Scioli estaba interesado en explotar gas y carbón de la cuenca Claromecó y sumar a Buenos Aires al grupo de provincias petroleras nucleadas en la Ofephi. En esa oportunidad el funcionario aclaró que era necesario realizar estudios complementarios de cuantificación y calificación de recursos de los yacimientos para definir la primera etapa de extracción de gas intersticial y proseguir la gasificación subterránea. También se anticipó el interés de la provincia de participar en la explotación a través del esquema de alianza público-privado, predominante en el desarrollo de no convencionales. Ya en 2010, cuando PAE denunció el hallazgo de carbón mineral en dicha cuenca, el Ministerio de Producción bonaerense ejecutó el Estudio de Tecnologías “Limpias” para la Explotación y Utilización del Carbón Mineral, con el objetivo de “desarrollar las políticas y fijar las normas y regulaciones de aplicación en la explotación y utilización de carbón mineral de su propio territorio, con tecnologías ‘limpias’ respetuosas del medio ambiente” (OPSur, 19/06/2015).

La gasificación subterránea de carbón, presentada por sus promotores como la alternativa limpia para el aprovechamiento de recursos de baja calidad, alojados en mantos profundos, es, sin embargo, una técnica experimental y de alto riesgo. Un estudio reciente del Departamento de Medio Ambiente del estado de Queensland, Australia, señaló a la empresa Linc Energy, a cargo de un proyecto de gasificación subterránea de carbón en Chinchilla, como responsable de la contaminación de suelos utilizados para el cultivo de trigo, cebada y algodón y pastoreo de ganado. Según el informe publicado por el diario ABC, de ese país, el Gobierno del Estado impuso una “zona de exclusión de excavación” en una superficie de 314 km², debido a las filtraciones de hidrógeno y metano liberado en el subsuelo. Los agricultores tienen prohibido cavar pozos de más de dos metros de profundidad (ABC, 10/08/2015).

A principios de este año trascendió que el grupo argentino australiano Delmo proyecta la generación de electricidad en el centro/sur de la provincia de Buenos Aires a partir de la gasificación subterránea del carbón de la Cuenca Claromecó. La firma asegura que adquirió derechos de exploración sobre 600 mil hectáreas, sin embargo, el ministro de Producción bonaerense, Cristian Breitenstein, aclaró que están analizando los pedidos de prospección y cateo de las firmas Delmo Group S.A., Claromecó Energy S.A. y Delmo PTI S.A., debido a que el Código de Minería de la Nación no permite que una persona física o jurídica concentre más de 200 hectáreas, y el directorio de las tres empresas tiene miembros en común.

un mega reservorio (Petrotecnica, diciembre 2010).

Además del interés en las aguas profundas, YPF evalúa el potencial en yacimientos someros del Golfo San Jorge, en tanto la francesa Total y la chilena Enap Sipetrol apuestan a ampliar sus proyectos en el Mar Argentino. La compañía europea apunta a extraer en el bloque Vega Pléyade alrededor de 6 millones de metros cúbicos diarios de gas -un 5% de la oferta nacional. La cam-

paña de perforación incluye, además, dos pozos de producción en el yacimiento Carina, a través del consorcio que integra con PAE y Wintershall Energía. Mientras que Enap Sipetrol, que opera en área Magallanes, al sur de Santa Cruz, está renegociando la prórroga de concesiones que vencen en 2016 (El Inversor Online, 29/05/2015).

Proyectos offshore y economías preexistentes

Así como la explotación de formaciones de lutitas y arenas compactas ha despertado movimientos de oposición tanto en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén como en Comodoro Rivadavia, la campaña de exploración sísmica realizada por PAE en el Golfo San Jorge, en 2009, dio lugar a un fuerte conflicto. Pescadores artesanales de Santa Cruz denunciaron que con el inicio de esos trabajos y durante más de un año y medio prácticamente habían desaparecido la centolla y la merluza del caladero. En 2014 los *hombres de mar* se declararon en estado de alerta ante el anuncio de YPF de realizar exploraciones en aguas de jurisdicción chubutense. La *flota amarilla* de Caleta Olivia teme que una nueva incursión en las aguas del Golfo tenga impactos similares y ponga en peligro 1.500 puestos de trabajo (La Opinión Austral, 17/08/2014).

En julio de 2013, fruto de una sostenida movilización, los pescadores artesanales de Santa Cruz lograron que se promulgue la ley provincial 3313 de Exploración de Hidrocarburos, norma que prohíbe en aguas del dominio público provincial “la exploración de hidrocarburos que utilicen detonaciones submarinas en las formas 2D y 3D por medio de prospecciones sísmicas, cuya intensidad supere los ciento veinte (120) decibeles”. Mientras que autoriza la realizada por medio de estudios que no afecten la biodiversidad marina, el lecho marino y las actividades pesqueras. Cabe destacar que la explotación de hidrocarburos costa afuera en el país no tiene un marco regulatorio específico, más allá de dos resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía -219/77 y 189/80- que refieren al cuidado del ambiente (Petrotecnica, diciembre 2008).

El interés por ampliar la frontera extractiva hacia aguas profundas, formaciones compactas, crudos extra pesados e incluso yacimientos de carbón no sólo confirman el fin de los hidrocarburos fáciles de extraer sino también la **obstinación de perpetuar la dependencia de los fósiles por el mayor tiempo posible sin problematizar la alta y creciente demanda de energía**. A pesar de su importancia, el elevado riesgo ambiental y costo financiero son variables que inciden en decisiones coyunturales pero no en políticas de fondo. Por otra parte, más allá de los discursos corporativos que intentan transmitir seguridad y certezas, **todas estas explotaciones se basan en técnicas experimentales, que se prueban y perfeccionan sobre la marcha, y cuyos impactos en el mediano y largo plazo se desconocen**.

**Periodista e investigador del OPSur, coordinador de Oilwatch Latinoamérica.*

1. Ver ¿Y si la vaca se cae?, pp. 5-8.
2. Ver Michael T. Klare, Un mundo sin petróleo fácil, publicado en Rebelión (21/03/2012)
3. En este sentido, cabe destacar que actualmente la recuperación secundaria representa alrededor del 40% de la producción de petróleo anual de YPF, según informa la compañía en su portal.
4. Si bien la autorización de EE.UU. para las operaciones Shell en el Ártico es tal vez de los horizontes extremos más difundidos, en Sudamérica esta tendencia toma fuerza. El caso más saliente es el de Brasil, donde la explotación de los yacimientos del presal a una profundidad cercana a los 7.000 metros, guardaría 90 % de las reservas petrolíferas probadas del país y 77 % de las gasíferas (IPS, 27/04/2015). Por otra parte la francesa Total anunció que en marzo de 2016 perforará un pozo en la plataforma marítima uruguaya, atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos (Presidencia. República Oriental del Uruguay, 05/08/2015). En tanto Colombia avanza sobre hidrocarburos en aguas ultra profundas del Mar Caribe (Electricidad, 29/07/2015).

Fuentes consultadas

ABC (Mark Solomons y Mark Willacy), 10/08/2015. Linc Energy: Secret report reveals toxic legacy of coal gasification trials near SE Queensland town of Chinchilla.
 DAR, 17/11/2014. DAR participó de la “Jornada de debate sobre el Autoabastecimiento Energético”.

El Economista (Facundo Matos Peychaux), 11/08/2015. Los programas energéticos de los presidenciales.

– El Inversor On line (Nicolás Gandini), 11/05/2015. YPF intentará mostrar avances en la exploración del mar antes de que termine el gobierno.

– (Nicolás Gandini) 29/05/2015. Enap Sipetrol quiere duplicar la producción offshore de gas en Santa Cruz.

– (Nicolás Gandini), 29/06/2015. Total inicia en agosto la perforación de un proyecto offshore de gas en el Mar Argentino.

– (Nicolás Gandini), 02/07/2015. Tight gas, la apuesta en campos no convencionales que eligen las petroleras.

– 06/08/2015. Para Galuccio, el 50% de la producción de gas será no convencional en 2020.

Electricidad. Revista energética de Chile, 29/07/2015. Anuncian hallazgo de hidrocarburos en aguas ultra-profundas del Caribe colombiano.

IPS (Fabiola Ortiz), 27/04/2015. Amazonia Azul, la nueva frontera de recursos naturales en Brasil.

La Opinión Austral (Irene Stur), 17/08/2014. Pescadores en alerta por una potencial prospección sísmica.

MDZ, 06/07/2011. YPF no logró encontrar petróleo offshore en Malvinas.

OPSur, 19/06/2015. Gasificación de Carbón en la Cuenca Cloromec: Un proyecto viciado de origen.

PetrolNews, 02/06/2015. Matranga se reunió en EE.UU. con inversores interesados en Vaca Muerta y el offshore.

Petroquímica, 26/05/2015. Tight gas, la puerta de entrada en Neuquén a los yacimientos no convencionales.

– 25/06/2015. Reconoció YPF que la viabilidad de Vaca Muerta depende de menores costos y mejores precios.

– 13/07/2015. Campos maduros, no convencionales y off shore, la trilogía perfecta a la que apuesta YPF.

Petrotecnica (Verónica Tito), diciembre 2008. Exploración y producción costa afuera en la Argentina: un desafío económico y ambiental.

– (Daniel Alberto Kokogian), diciembre 2010. Perspectivas exploratorias de la plataforma continental argentina (Nota II).

Presidencia. República Oriental del Uruguay, 05/08/2015. Firma francesa Total realizará inédita perforación en busca de hidrocarburos en marzo.

Rebelión (Michael T. Klare), 21/03/2012. Un mundo sin petróleo fácil.

YPF (Daniel Figueroa), 2010. Perspectivas Exploratorias en el Offshore de Argentina, presentado al Congreso de Producción del Bicentenario, realizado en Salta del 18 al 21 de mayo.

Hidrocarburos y ajedrez geopolítico

Acuerdos internacionales para el avance de las energías extremas

Lejos de ser una apuesta puramente corporativa, el avance de los no convencionales ha sido fuertemente promovido por distintos gobiernos a nivel global, con Estados Unidos a la vanguardia. La más reciente de estas iniciativas es un informe pro-fracking surgido en el seno del Eurolat.

Fotos Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat)



Por OPSur

El impulso global a la extracción de gas y petróleo de lutitas (*shale*) ha sido motorizado desde su inicio por el gobierno de EE.UU. Bajo el concepto de *seguridad energética* la administración Obama diseñó una política exterior fuertemente ligada a una agenda de diversificación de fuentes de energía -nuclear, agro-combustibles, entre otras alternativas- donde el *shale* tiene un lugar central. Documentos filtrados por WikiLeaks y publicados por la revista norteamericana Mother Jones muestran cómo las autoridades de ese país, a través del Departamento de Estado y su Programa para el Compromiso Técnico en Gas no Convencional alentaron la aplicación del *fracking* por todo el mundo. La misma Secretaria de Estado, Hillary Clinton (2009-2013), viajó por Rumania, Polonia y Bulgaria buscando asegurar el desarrollo de los no convencionales y eliminar la prohibición a la fracturación hidráulica en este último país (Mother Jones, octubre 2014; OPSur, 05/12/2012). Similar situación ocurrió con la gira latinoamericana del entonces Secretario Adjunto de Energía norteamericano, Daniel Poneman, en mayo de 2014. Tras recorrer Chile y Colombia, visitó Argentina para firmar un “convenio de cooperación energética”. Sus objetivos

fueron dejados en claro por el bloque de legisladores del Frente para la Victoria en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados: “El financiamiento que ofrecen las empresas norteamericanas es uno de los principales intereses detrás del acuerdo, por el ingreso de inversiones al país. (...) En este sentido, el convenio se utilizará para el intercambio de experiencias y transferencia de tecnología” (Cámara de Diputados de la Nación, 2014: 2). Aunque la intervención estadounidense a favor del *shale* fue más activa en México, donde desplegó un fuerte *lobby* en favor de la reforma energética (Sin Embargo, 13/09/2014).

Así, durante el último lustro se han desarrollado distintas iniciativas de fomento internacional del *fracking* -bilaterales o dentro de acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo Transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos (Martin-Sosa y Rico, 2014)- en el marco de un delicado ajedrez geopolítico donde se busca asegurar el control de la mayor cantidad de recursos hidrocarburíferos en la perspectiva del agotamiento global de estos. Sin embargo la promoción pública de mayor envergadura multilateral del *fracking* es la que se intentó a través de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Creado

en 2006, este espacio conocido como Eurolat reúne a legisladores de ambos continentes, los que buscan influir en políticas comerciales y sociales en ambas regiones. Definido por su copresidente, el socialista español Ramón Jáuregui, como “el brazo parlamentario” de la relación birregional (EFE, 4/9/2014), su capacidad real de intervención se relaciona con los documentos de recomendaciones que emana, los que buscan ser utilizados como antecedente en los respectivos ámbitos nacionales.

En dicha instancia la diputada de la derecha española Pilar Ayuso (Partido Popular) impulsó en la Comisión de Desarrollo Sostenible el informe *Sobre Oportunidades y Desafíos del Gas de Esquisto*, cuya redacción compartió con el diputado colombiano Mauricio Gómez (Partido Liberal). El documento se basa en la supuestamente exitosa experiencia norteamericana para promover el aprovechamiento de estos recursos en ambas regiones, con foco en América Latina. El documento no sólo busca avanzar en una imposible replicación de la experiencia estadounidense con el *fracking* -debido a los distintos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en el resto del mundo (Amigos de la Tierra Europa, 2014)-, sino que además oculta las numerosas controversias y oposiciones que ha tenido esta técnica, incluso en ese país. En resumen, se hace eco del discurso corporativo para promover irrestrictamente el desarrollo de yacimientos de lutitas como alternativa energética segura, llamando a crear “las condiciones adecuadas para la atracción de inversiones”, considerándolos una “fuente de independencia energética y crecimiento económico y (...) elemento central de política energética de la Unión Europea para la diversificación y la seguridad del abastecimiento” (Ayuso y Gómez, 2015).

En marzo de este año el informe recibió el rechazo de más de 200 organizaciones ambientales, sociales, sindicales y políticas de ambos continentes, las que a través de la *Declaración internacional contra acuerdo euro-latinoamericano pro fracking* alertaron que la aprobación de la iniciativa se constituiría en el primer antecedente de promoción pública birregional de esta técnica y podría ser utilizado por los parlamentos nacionales como referencia para despejar el camino a los no convencionales. Dentro de numerosas críticas, solicitaron una modificación en su redacción basándose en tres aspectos centrales: la denuncia del doble estándar con que operan las petroleras en América Latina, ausencia del requisito de consulta previa a las comunidades locales y, finalmente, que el documento llame a una moratoria a la aplicación del *fracking* basándose en el principio precautorio.

La fuerte oposición al informe del Eurolat también movilizó a los sectores pro-*fracking* del continente. La senadora argentina, María de los Ángeles Higonet (Partido Justicialista, La Pampa), invitó a varios miembros del Eurolat a visitar el área Loma Campana, en Neuquén, para “promover una mesa de trabajo sobre el proyecto de informe” previo a la presentación de enmiendas. La gira, que incluyó una cena con el gobernador neuquino Jorge Sapag, inspiró fuertemente al colombiano Mauricio Gómez, a juzgar por sus declaraciones durante la asamblea del Eurolat realizada en

junio en Bruselas. Durante la discusión en comisión, Gómez repitió varios de los argumentos de la publicidad de YPF: como que los químicos utilizados durante la fractura se encuentran en la mesa de cualquier familia, que el *fracking* es seguro y que la operación se realiza en una zona “desértica”. Para luego agregar que después de viajar a la Argentina, lo habló con su gobierno: “porque a mi presidente le interesa avanzar con el tema del *fracking* ya que nosotros tenemos reservas de gas”.

La masiva oposición empantanó el desarrollo del informe, que sus redactores buscaban aprobar durante 2015, debido a que 177 enmiendas presentadas obligaron a aplazar la votación para el próximo año. En su mayoría estas apuntan en la misma dirección que las críticas realizadas por las organizaciones de ambos continentes, llamando a aprobar una moratoria al *fracking*, lo que constituye un giro en 180 grados en el debate. “El informe va en la línea de promoción al *fracking* y por eso ha recibido más de 170 enmiendas, porque debe ser cambiado de arriba a abajo”, señaló el eurodiputado Ernest Urtasun, del partido ecosocialista catalán ICV, en diálogo con OPSur. Urtasun, que es co-vicepresidente del Eurolat, destacó la importancia que tienen estos espacios multilaterales para que los parlamentarios y la sociedad civil sean “capaces de poner cuestiones en la agenda que los gobernantes sino no pondrían”. En tanto su par Florent Marcellesi, del partido ecosocialista español EQUO, consideró que este debate se da en el marco de la disputa geopolítica por promover el *fracking*. “Más que una cosa local, esto es una búsqueda loca por tener algo de energía que nos permita seguir con el modelo energético. Y para eso tienes detrás un doble empujón: privado, de las multinacionales, y al mismo tiempo uno muy fuerte de lo público. Porque lo público no siempre es lo sostenible y eso lo podemos ver en América Latina, donde tienen un debate muy importante en torno al extractivismo”, aseguró.

El empuje público internacional se hace presente en la especulación que busca el avance de las energías extremas en la región. Este va más allá de Estados Unidos, como demuestra la discusión en el Eurolat: los no convencionales también tienen aliados europeos y apoyos locales que los posibilitan. Igualmente el Eurolat es un precedente para la resistencia al *fracking*, que busca que la región no sea usada como peón del tablero energético internacional.

Fuentes consultadas

Amigos de la Tierra Europa, 2014; Fracking Frenzy.

Ayuso, Pilar y Gómez, Mauricio (02/03/2015); Proyecto de Informe sobre Oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países ALC y en los Estados miembros de la UE.

Cámara de Diputados de la Nación (Comisión de Energía y Combustibles), 15/07/2014. Sesiones Ordinarias. Orden del Día N° 393.

EFE (04/09/2014); El socialista Ramón Jáuregui elegido presidente de Eurolat en el PE.

Martín-Sosa, Samuel y Rico, Luis (2014); El TTIP, un espaldarazo al fracking, Revista El Ecologista n° 81.

Mother Jones (Mariah Blake), Octubre 2014; How Hillary Clinton's State Department Sold Fracking to the World.

Observatorio Petrolero Sur (OPSur, 05/12/2012); Regulando los mercados globales: EE.UU. y la promoción del shale.

Sin Embargo, 13/09/2014; De cómo Washington impulsó el fracking por el mundo, y ahora su enviado especial da bendición a reforma de EPN.

VVAA., 16/03/2015; “Declaración internacional contra acuerdo euro-latinoamericano pro fracking”.

AVANCE CIEGO DEL FRACKING EN AMERICA LATINA

Aunque persisten las iniciativas y operaciones de exploración y explotación a través de *fracking* en varios países, la caída de los precios del petróleo mantiene frenado un proceso que era promovido como una de las grandes soluciones energéticas para la región: la explotación de yacimientos de lutitas. En la formación Vaca Muerta, en Argentina, se sostiene el único proyecto de desarrollo masivo de hidrocarburos no convencionales (HNC) por fuera de EE.UU. En tanto en México, sin la participación de la estatal Pemex, se realizó la Ronda 1 de concesiones, considerada como el banderazo de salida para el nuevo escenario liberalizado y transnacionalizado, tras la histórica reforma energética iniciada en 2013. Ambos países son la punta de lanza del desarrollo de los HNC en la región, seguidos con incipientes actividades de exploración por Colombia, Bolivia, Chile y Uruguay; y anuncios oficiales sin resultados concretos en Perú y Paraguay. Al mismo tiempo se abren escenarios de explotación de otros tipos de energías extremas, como el gas asociado a mantos de carbón en Colombia y Argentina, y las aguas profundas del presal, en Brasil.

La movilización social en contra del *fracking* en diversos puntos del continente, permeó el debate público y logró visibilizar los impactos y riesgos de esta técnica como un factor a considerar, al mismo

tiempo que acciones judiciales lograron frenar, al menos temporalmente, pozos en Brasil y Argentina. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos han mostrado una firme posición para avanzar con la exploración y explotación de HNC, iniciando una carrera por exprimir las últimas gotas de recursos fósiles.

Donde no hay disparidad es en falta de participación social en las decisiones públicas para autorizar o no el *fracking* en nuestros países: en ninguno se han realizado consultas previas a las comunidades ni estudios integrales sobre los impactos y riesgos de esta técnica, tampoco se tiene acceso a la información sobre los contratos petroleros y operaciones, ni se han cuestionado las cifras norteamericanas sobre la estimaciones de recursos no convencionales.

Así, sin consentimiento, participación, acceso a la información ni estudios independientes, avanza la carrera ciega del *fracking* en América Latina.



SHALE GAS
545mmmmpc

SHALE OIL
13,1mmmb

SHALE GAS
141,5mmmmpc
PROPIAS: PEMEX 2011
SHALE OIL
31,9mmmb

2013: Reforma Energética abrió el sector petrolero a la inversión privada para, entre otros, facilitar la explotación de HNC.

SHALE GAS
55mmmmpc

SHALE OIL
6,8mmmb

IMPACTOS

No han existido espacios de participación social en la decisión de los gobiernos para autorizar el fracking en ninguno de los países.

Se violan derechos de acceso a la información pública. **Acuerdos opacos**, contratos de explotación de HNC inaccesibles y a espaldas de la ciudadanía.

Numerosos **accidentes, derrames e incendios** en zonas de explotación masiva de HNC.

2013 y 2014: Decretos y Resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que norman la explotación de HNC.

SHALE GAS
165mmmmpc

SHALE OIL
13,4mmmb

SHALE GAS
245mmmmpc

SHALE OIL
5,3mmmb

En Brasil todos los lotes onshore pueden ser explotados para HNC. Para ello necesitan la concesión de la Agencia Nacional de Petróleo y Licencia Ambiental.

RESISTENCIAS

Se han **declarado libres de fracking** numerosos municipios, departamentos y comunidades en México, Brasil [4], Uruguay [3] y Argentina [más de 45].

Los impactos y riesgos del fracking se han **posicionado en la agenda pública** de la discusión energética de los países.

Construcción y **consolidación de redes** locales, nacionales y regionales que se oponen al fracking y buscan alternativas

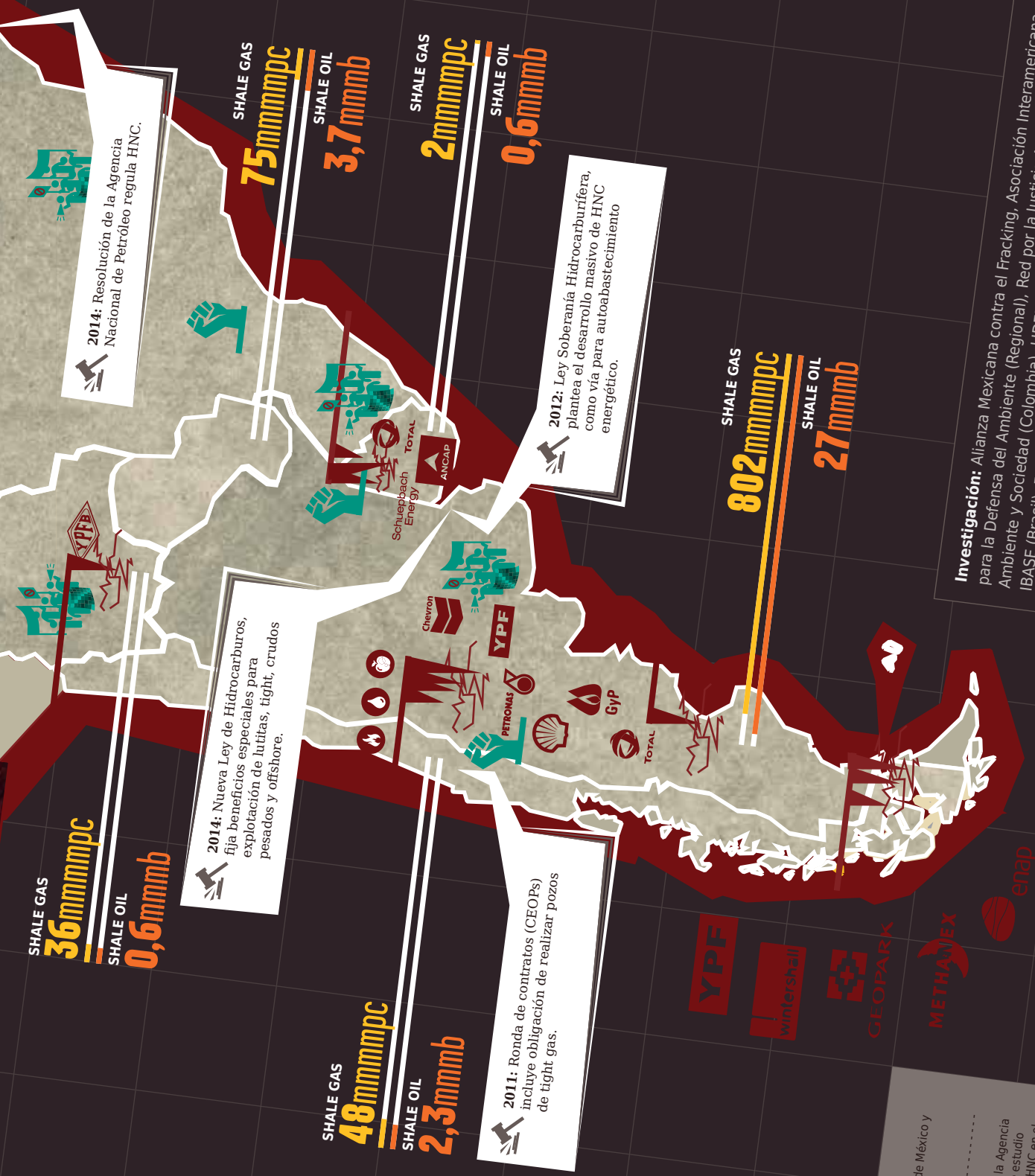
REFERENCIAS

- Perforaciones
- Incendios
- Derrames
- Conflicto productivo
- Resistencia local
- Resistencia nacional
- Leyes profracking



En el mapa se ubican las principales concesiones de HNC de México y Argentina a modo de referencia

La estimación de recursos está hecha en base al Informe de la Agencia de Información Energética (EIA) de 2013. Cuestionamos este estudio mundo, y lo usamos como referencia para destacar este hecho. El shale gas está medido en billones de pies cúbicos (mmmmpc), mientras que el shale oil en miles de millones de barriles (mmmb).



2014: Resolución de la Agencia Nacional de Petróleo regula HNC.

2014: Nueva Ley de Hidrocarburos, fija beneficios especiales para explotación de lutitas, tight, crudos pesados y offshore.

2011: Ronda de contratos (CEOPs) incluye obligación de realizar pozos de tight gas.

2012: Ley Soberanía Hidrocarburífera, plantea el desarrollo masivo de HNC energético.

Investigación: Alianza Mexicana contra el Fracking, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Regional), Red por la Justicia Ambiental en Colombia, IBASE (Brasil), FAPP-BG (Brasil), LIDEMA (Bolivia), Fundación Oswaldo Cruz (Brasil), (Uruguay). La información contemplada en esta infografía es parte de una investigación más amplia que será divulgada por las instituciones en los próximos meses.

México: las profundas raíces de la violencia



Por Aroa de la Fuente López*

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales¹, nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del *iceberg*. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejerci-

da por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de *desarrollo* ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos²; la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.³



Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Istmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos⁴, así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la

reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.⁵

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales suscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

La nueva *Ley de Hidrocarburos* da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir, también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La *Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética*, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán

Fotos Alianza Mexicana contra el Fracking

sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en la *Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos*, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

Muchos mundos

Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del *fracking*. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas⁶. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la

legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del *fracking*, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en el que quepan muchos mundos.

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación (www.fundar.org.mx) y la Alianza Mexicana contra el Fracking (www.nofrackingmexico.org).

1. En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).
2. Más información sobre este caso se encuentra en <https://consultaindigenajuchitan.wordpress.com>
3. Para conocer más sobre este proyecto ver en <http://noamonterreyvi.com/que-es/>
4. Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).
5. Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005).
6. Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible en http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2014/seguimiento/18575/1857500102714_065.pdf

Fuentes consultadas

- AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.
- BBC Mundo (06/12/2014). México: "identifican" los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
- Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.
- Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.
- El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.
- Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.
- La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.
- Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.
- (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.
- Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.
- Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.



Fotos Nejma Rondeleux

Magreb

Tan cerca de Europa

Medio siglo después de las luchas por la independencia, el norte de África vive una suerte de neocolonialismo en donde los gobiernos y las empresas privadas europeas tienen un peso decisivo en las políticas nacionales. En materia energética Europa mira al Magreb buscando sumar, a futuro, fuentes hidrocarburiíferas no convencionales, sin embargo la utilización del fracking ha despertado una fuerte resistencia local en una de las zonas más secas del mundo. La exigencia de una moratoria al uso de esa técnica se expande por la región.

El Magreb, es decir, “el poniente” en árabe, es la zona del norte de África que comprende los territorios de Mauritania, Sahara Occidental, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Tradicionalmente islámica, la región fue en 2011 la cuna de lo que en estos pagos se conoció como Primavera Árabe pero que allí se reivindica como la Revolución de la Dignidad, un movimiento democratizador sin precedentes que terminó expandiéndose por buena parte del mundo árabe. Por la misma época la zona era tocada por la varita mágica estadounidense: según la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, la región tiene uno de los mayores potenciales de gas y petróleo de lutitas (*shale*). Mientras Libia era sindicada como el quinto país con mayores recursos técnicamente recuperables de *shale oil* fuera de EE.UU., Argelia se ubicaba en el tercer lugar del ranking de *shale gas*, sólo por

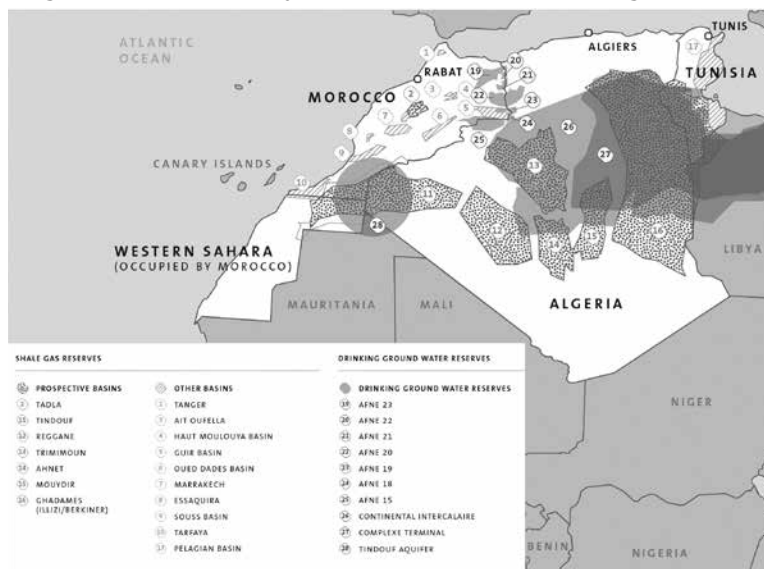
detrás de China y Argentina. A pesar de que dicho informe es ampliamente cuestionado, incluso desde sectores corporativos,¹ comenzó a ser esgrimido desde los gobiernos como argumento para la búsqueda de acuerdos con una serie de empresas europeas que permitieran desarrollar el sector no convencional en la región, particularmente en Marruecos, Túnez y Argelia.

En este último país las masivas y violentamente reprimidas protestas en contra de la utilización del fracking en el Sahara, iniciadas en enero, recorrieron los medios periodísticos del mundo y se pusieron en el centro del debate político, tanto a nivel regional como en distintos espacios internacionales. Así ocurrió durante el Foro Social Mundial 2015 realizado en Túnez, al que viajó un grupo de dirigentes de la región argelina de In Salah en busca de apoyos para su lucha. Durante el encuentro corrió el rumor de que habían

Por Felipe Gutiérrez Ríos*

llegado micros con gente pagada por el gobierno argelino para defender el *fracking*, finalmente ambos sectores se encontraron durante una actividad sobre resistencias a los no convencionales. “Hablar de *shale* es peligroso en Argelia”, comentaba el activista anti-*fracking* Fateh Titouche². “Por ejemplo, ese señor que está sentado ahí, y me está grabando, es diputado de mi país”, señaló apuntando a un hombre sentado al final de la sala, el que preguntó si había algún problema con que estuviera grabando. “No, pero quería comentar las consecuencias que tiene hablar de *fracking* en Argelia”, respondió Titouche. Hacia el final de la mesa, la sala se fue llenando de argelinos. Cuando Titouche terminó su exposición, ambos grupos comenzaron a gritarse, acusarse unos a otros de antiargelinos y de trabajar para el Mossad, el servicio secreto israelí. Al final, la sala fue desalojada. Aunque el incidente no llegó a los golpes, a todos los presentes les quedó la amargura: en el Magreb recién comienza a hacerse *fracking* y sus consecuencias ya están a la vista.

Magreb. Gas de lutitas y reservas subterráneas de agua potable



sources: Académie de l'Eau, BRGM, OREau, UNESCO - August 2011, pg 62, US EIA, WRI, Swedish Water House.

Rebelión en el oasis

Argelia, quizás el país más icónico de la lucha contra el colonialismo en el siglo XX, es el más grande de África. Miembro de la OPEP desde 1969, es el principal productor de hidrocarburos del continente y su venta representa el 97% del valor total de sus exportaciones y el 26% de su PBI. Del total de la extracción, el 88% tiene como destino la otra orilla del Mediterráneo, lo que la convierte en una prioridad estratégica para la Unión Europea. Como otros países magrebíes, es una suerte de paraíso para las petroleras multinacionales. La vanguardia la ocupan las corporaciones privadas llegadas del norte, instaladas hace décadas en su territorio, como la española Repsol, la francesa Total y la francobelga GdF-Suez, entre otras. A la cercanía con las casas matrices y la mínima legislación ambiental del país, se suma un Estado caracterizado por altos índices de

corrupción, fuerte dependencia de la renta petrolera y un nulo interés por la diversificación productiva (Platform London, 2014).

En ese marco, en 2013 el Congreso argelino votó por unanimidad la nueva Ley de Hidrocarburos. “Es necesario vincular el problema del *fracking* con la democracia en Argelia” señaló Fateh Titouche, miembro de la asociación Acción Ciudadana por Argelia. “La nueva Ley se aprobó a través de un doble discurso que lo permitió. La falta de democracia es el problema central del país”, afirmó refiriéndose a que los no convencionales no eran parte de la discusión durante la tramitación de la ley, y recién fueron permitidos a partir de una serie de enmiendas durante 2014.

Esgrimiendo argumentos como la baja del precio del petróleo así como del horizonte de reservas del país, junto a un explosivo aumento de la demanda interna, el gobierno argelino impuso la meta de aumentar la extracción de hidrocarburos en un 20% para 2019, a través de la explotación de yacimientos de gas y petróleo de lutitas (La Verdad, 4/5/2015). El 31 de diciembre de 2014 un Consejo extraordinario de Ministros aprobó el primer plan piloto de *shale*, lo que detonó masivas movilizaciones de carácter pacífico, que tuvieron como epicentro a la ciudad de In Salah, un oasis del Sahara en el centro-sur del país. La represión policial dejó un estudiante asesinado, lo que intensificó la movilización.

En un intento por minimizar las manifestaciones varios ministros visitaron la zona. Titouche contó que esto volvió a avivar las protestas debido a la actitud que tuvieron los miembros del gabinete, que trataron a la población de ingenua. Mientras reconocían que el *fracking* pudo haber ocasionado impactos negativos en otros países, esos estaban controlados en Argelia. El problema central en la zona, así como en todo el Magreb, es que el estrés hídrico es permanente y las napas de agua no son renovables en una de las zonas más áridas del mundo. Así, la competencia por el agua que supondría el *fracking*, además de los riesgos ciertos de contaminación, ponen en peligro tanto la actividad productiva ganadera y agricultora de la población local, como la sobrevivencia misma de estas personas (Attac y Frack Free Europe, 2015).

Las exploraciones continuaron a pesar de la masificación de las protestas que incluyeron la ocupación de la plaza mayor de In Salah y el bloqueo de pozos. Con excepción de la capital Argel, donde fueron prohibidas, las manifestaciones se repitieron en las principales ciudades del país exigiendo una moratoria al *fracking*. Líderes de la movilización recordaron las pruebas nucleares realizadas por el gobierno francés durante la década de 1960, en plena guerra de independencia, en Reganne, distante a 200 kilómetros de In Salah (Open Democracy, 13/02/2015). “Somos conejillos de india”, sostuvo Titouche; “Argelia tiene reservas convencionales y a pesar de eso quieren promover la explotación de lutitas, lo que demuestra que estamos sometidos a las potencias extranjeras. Por eso dicen que París es la segunda capital de Argelia”.

El tsunami marroquí

Socio comercial estratégico de Europa, Marruecos es uno de los destinos “más atractivos del mundo en términos de inversiones relacionadas con la exploración de petróleo”, según Gerard Lane, director financiero de la compañía norteamericana Kosmos Energy (Attac y Frack Free Europe, 2015). Como sus vecinos, el país combina la ausencia de regulación ambiental con una nula transparencia en los contratos en un marco de alta corrupción, lo que se convierte en una triada muy *atractiva* para la inversión petrolera.

“Cuando se supieron las proyecciones de gas de lutitas, el gobierno empezó a decirle a la gente que iban a hacerse ricos como los saudíes”, contó Mohamed Benata, además aseguró que el gobierno pretende avanzar con los no convencionales “como un tsunami”. Presidente del Espacio de Solidaridad y Cooperación con el Oriente (ESCO), llamó también la atención sobre los posibles riesgos en un territorio donde todas sus napas de agua se encuentran interconectadas. Coincidió con su colega argelino, en que el avance de proyectos para la explotación de yacimientos no convencionales habla de un problema de la democracia. “Creo que en el Magreb deberíamos dar una respuesta contundente al *fracking* y condenarlo de la misma manera que se condena al terrorismo yihadista”, concluyó Benata.

A finales de 2012, ESCO fue uno de los organizadores de la Conferencia Internacional de la ciudad marroquí de Oujda, uno de los primeros hitos de la organización del movimiento regional contra el *fracking*. En dicha ocasión organizaciones de distintos países del norte de África hicieron un llamado a sus gobiernos a “optar por el principio precautorio y trabajar por el interés general de los pueblos prohibiendo el uso de esta tecnología de fracturación hidráulica”.

Túnez y la promesa del autoabastecimiento

En Túnez, en tanto, desde el inicio de las protestas populares de 2011, que terminaron con los 24 años de dictadura encabezada por Ben Ali, se han sucedido seis gobiernos. “Cada uno ha llegado con su propia agenda energética, la del actual es el *fracking*”, contó Khaoula Chikhaoui de la organización juvenil Raj-T. Sin las reservas de sus vecinos Libia y Argelia, el discurso pro *fracking* avanzó en el país de la mano de una supuesta autosuficiencia energética. “Los argumentos que siempre usan es que la producción petrolera está bajando en el país y que tenemos recursos y reservas de gas, por lo que sería algo positivo respecto de la independencia energética del país, así como para dar una garantía de que el Estado puede pagar la deuda [externa]. Dicen que es como un respaldo financiero tener esa riqueza”, había explicado Sabria Barka de la organización Ecoconciencia, al portal mexicano *Hijos de la Tierra* (febrero 2015).

La primera fractura en lutitas en Túnez la realizó en 2010 la anglo-francesa Perenco en el campo de El

Franing. Según relató Chikhaoui, la inversión fue promovida por el Banco Africano del Desarrollo, símil del BID en ese continente. Actualmente el conflicto se centra en la región de Kairouan -a unos 150 kilómetros al sur de la capital Túnez- donde, según anunciaron las autoridades en 2012, la anglo-holandesa Shell y petrolera estatal ETAP, proyectan la realización de 742 pozos en un período de 50 años (Greenprophet, 13/12/2013). “Un problema muy grave es que estos acuerdos nunca son transparentes, y los gobiernos tienen mucha cercanía con las compañías. El Primer Ministro Mehdi Jomaa, que el año pasado aseguró que avanzarían con el *fracking* a pesar de las críticas, proviene de la industria petrolera y así pasa con muchos otros ministros”, comentó Khaoula Chikhaoui. “Cuando nos enteramos por la prensa del acuerdo con Shell, fue cuando la sociedad civil en Túnez que se estaba moviendo, como las asociaciones ambientales y de Derechos Humanos, cogieron esta temática y se dieron cuenta del peligro y de los grandes riesgos sanitarios y ambientales”, relató, por su parte, Sabria Barka a Hijos de la Tierra (febrero 2015).

Mientras las protestas por la utilización de agua para el fracking se masifican en el Norte de África, la agenda público-privada de los no convencionales pareciera avanzar a través de la represión a sus detractores. Detrás de los discursos de la autosuficiencia, el tsunami energético y la independencia económica, se ocultan intereses extranacionales, que buscan sumar fuentes hidrocarburíferas para contrarrestar la dependencia energética europea de otros países, como Rusia. El paquete tecnológico del *fracking* muestra en el Magreb su perspectiva neocolonial y recuerda una frase célebre adjudicada a Porfirio Díaz. *¡Pobre Magreb!, tan lejos de dios y tan cerca de Europa.*

1. Por ej, un estudio polaco redujo en un 85% los recursos que la EIA había calculado en ese país y aún hoy se duda que ese 15% realmente pueda ser recuperado (EIA 2011; Bloomberg 21/03/2012).

2. Las citas de Fateh Titouche, Mohamed Benata y Khaoula Chikhaoui fueron tomados de la mesa “Resistencias Globales al gas de lutitas”, durante el Foro Social Mundial 2015.

Fuentes consultadas

Attac y Frack Free Europe, 24/03/2015; Los Hidrocarburos no convencionales en el Magreb, un ecocidio anunciado.

Bloomberg (Marek Strzelecki), 21/03/2012; Poland Says Shale Reserves May Be 85% Below U.S. Estimate.

Declaración de la Conferencia de Oujda, 08/12/2012.

Greenprophet (Linda Pappagallo), 13/12/2013; Shale gas and fracking lies exposed in Tunisia by local bloggers.

Hijos de la Tierra, febrero 2015; Entrevista con Sabria Barka.

La Verdad (Alexia Rivera), 4/5/2015; Argelia: la industria petrolera en la cuerda floja.

Open Democracy (Rashida Lamri), 13/02/2015; Protests in Algeria intensify as shale-gas drilling continues.

Platform London (2014); Reinforcing dictatorships, Britain's gas grab and human right abuses in Algeria.

U.S. Energy Information Administration (EIA) (2011); World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States.

Propuesta de cara a la COP21 de París, diciembre 2015

Es tiempo de crear el grupo anexo 0



Ilustraciones AngieVanessita

Este documento tiene como objetivo presentar compromisos y esfuerzos que los pueblos, nacionalidades y comunidades están haciendo para la no extracción de petróleo, gas o carbón como contribución para evitar el desastre climático.

Junto a estos compromisos está nuestra demanda a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y a los gobiernos para que se reconozca, respete, promueva y proteja a este tipo de acciones que tienen como meta proteger el clima y la vida en el planeta.

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en la Cumbre de Río de 1992, dividió a los Estados parte en dos grupos: **Anexo I** que son los países industrializados del Norte, más aquellos cuyas economías estaban en fase de transición; y **No Anexo I** que son, en esencia, los países del Sur global. Posteriormente se estableció el **Anexo II**, que incluye a los miembros del Anexo I que deben ofrecer recursos financieros y técnicos para permitir a los países del Sur emprender actividades de reducción de las emisiones de conformidad e iniciativas de adaptación. Oilwatch afirma que, desde el siglo XIX, para los países del Anexo I y II, el motor del desarrollo del capitalismo ha sido la explotación de carbón, petróleo y gas, por lo que **han hecho todo lo que esté a su alcance para detener cualquier decisión que pueda llevar a acciones concretas y vinculantes para disminuir el consumo de estos combustibles fósiles**. Así, al cabo de más de 20 años de negociaciones internacionales, el calentamiento global sigue en aumento sin soluciones efectivas y reales para detenerlo.

En este escenario, precisamente, uno de los obstáculos ha sido la influencia directa que las empresas vinculadas a los combustibles fósiles han ejercido sobre las decisiones de la Convención. Hoy este sector

corporativo es parte de los promotores de las falsas soluciones que exacerbaban el aumento del efecto invernadero, como son el mercado de carbono, los agrocombustibles, REDD o la geoingeniería, e inclusive tecnologías petroleras como la Captura y Almacenamiento de Carbono (CCS), entre otras. Al mismo tiempo, expanden los alcances territoriales hacia las denominadas *nuevas fronteras*: mares profundos y yacimientos “no convencionales”, donde se destaca la perniciosa técnica del *fracking*.

Por si fuera poco, la limitada visión de Naciones Unidas, que se concentra en impulsar negociaciones entre partes, que son Estados, ha permitido a los países industrializados del Norte no cumplir con sus obligaciones climáticas, mientras que, en un escenario injusto y neocolonial, se trasladan sus responsabilidades a los pueblos y naciones del Sur. Cuando es precisamente en este lado del mundo en donde se encuentra la mayoría de naciones y regiones subnacionales o localidades, y sobre todo, pueblos indígenas, campesinos, pescadores o comunidades tradicionales que están haciendo esfuerzos reales para proteger el clima -a pesar de ser las más afectadas. Son las iniciativas de pueblos las que están siendo dejadas de lado y, en muchos casos, criminalizadas, cuando sus esfuer-

pansión y acumulación del capital. Un capitalismo institucionalizado y global con rasgos más decadentes y letales requiere de una acción también global que lo confronte.

Mientras los sectores corporativo y financiero deciden cuánto petróleo se extrae, de dónde, de qué tipo, cuánto se vende y a qué precio; y frente a la incapacidad de los yacimientos “tradicionales” de abastecer la exponencial demanda de los sectores concentrados, la industria y gobiernos han avanzado en los últimos años en los denominados “no convencionales”. Con técnicas más costosas y degradantes, como el *fracking*, se busca mantener la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer el proceso de acumulación, la apropiación de territorios, desposesión y violación de los derechos de los pueblos.

Dejar el petróleo y otros hidrocarburos fósiles en el subsuelo es la medida más directa y concreta para lograr resultados en relación al clima, así como para confrontar el capitalismo, la explotación de los seres humanos y la privatización de la naturaleza a nivel global.

Métrica, escenarios y modelos

Los estados miembros de la UNFCCC se pusieron la meta de adoptar en París 2015 un nuevo acuerdo global sobre cambio climático. La retórica dice que será para evitar que el planeta sobrepase el límite de 2°C de calentamiento en relación con la temperatura preindustrial. Este límite supuestamente marca la línea entre un clima cambiante al que podemos adaptarnos y un desajuste climático de consecuencias imprevisibles e irreversibles.

Para llegar a esta cifra, tanto la UNFCCC como los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) han usado siempre las concentraciones de dióxido de Carbono como una medida estándar, señalando la *reducción* de emisiones más no la cantidad de hidrocarburos fósiles que no se deberían extraer. Esto ha estado en línea con el interés oficial de evitar hablar del problema real que es la quema de combustibles

fósiles. Hablar de cantidades de petróleo, gas o carbón permitiría visualizar las responsabilidades, y las acciones necesarias, para evitar la crisis del clima.

De acuerdo a las cifras oficiales se puede desprender que para alcanzar un máximo de 2°C de temperatura (escenario RCP2.6 del IPCC), hacia el año 2100, **habría que dejar en el subsuelo al menos las 2/3 partes de las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón.** Así, de los 1.700.000 millones de barriles de petróleo que están aún bajo tierra, 1.190.000 millones deberán permanecer allí; de los 187 millones de millones de metros cúbicos de gas natural, 131 millones de millones no se deberán extraer; y, de los 892.000 millones de toneladas de carbón, 624.000 deben permanecer en su lugar. El objetivo ahora es decidir dónde y cómo empezar a dejarlos en el subsuelo. Al usar estas cifras no pretendemos una cuantificación mercantilizable ni que se deriven equivalencias nefastas en el mercado de servicios ambientales u otras formas de *compensación mercantil*, sino como una manera de visibilizar las magnitudes de los esfuerzos necesarios hacia una civilización pospetrolera.

Esto implica pasar de un modelo energético de producción centralizado y a gran escala a modelos con energías limpias, renovables, descentralizadas, diversas, soberanas y ecológicas. Para esto, una necesidad es un cambio de concepción sobre la energía, lo que incluye saber qué tipo, cuánta y para quién se la necesita y una reflexión sobre las energías en los territorios y para los pueblos.

zos por no extraer más hidrocarburos fósiles debieran ser premiados.

Vemos que, en términos prácticos, además de los Estados nacionales, hay otros actores determinantes con capacidad e interés por acelerar las transformaciones requeridas para la protección del clima global. En este sentido **deben ser reconocidos por la Convención del Cambio Climático, por ejemplo, los pueblos y naciones indígenas, provincias, estados o regiones subnacionales y las localidades que dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos del subsuelo.** Por lo tanto se debe crear el *Grupo Anexo 0* en donde estarían precisamente estos pueblos y territorios, pues están resolviendo las causas del problema: la adicción a los combustibles fósiles.

Enfocarse en las causas

Principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial se consolidó la base industrial de un capitalismo adicto a los combustibles fósiles, así como una cultura basada en un patrón de consumo sin fin, energético y material, extensivo, expansivo y nocivo. Como parte de este modelo, que se expande además a la minería a gran escala y una *agricultura* industrial altamente consumidoras de petróleo. Esta adicción a los fósiles no sólo está afectando al clima, está provocando enfermedades degenerativas y mortales a millones de personas, inunda de basura no degradable el planeta, extermina a cientos de culturas tradicionales -desplazando usos y costumbres sanas y ecológicas-, y sigue generando crisis económicas, sociales, políticas, ambientales para la ex-



Protección, reconocimientos e incentivos

Las iniciativas calificadas como parte del Anexo 0 deben ser protegidas y apoyadas con una serie de **incentivos y reconocimientos internacionales** basados en la solidaridad, el intercambio tecnológico sin ataduras y la existencia de una deuda ecológica asociada al clima. La creación del Anexo 0 además incentivará nuevos compromisos y esfuerzos concretos enfocados en enfrentar las causas determinantes del cambio climático.

Los indicadores de estas iniciativas serán:

1. Hidrocarburos fósiles conservados en el subsuelo
2. Formas de vida basadas en una relación de respeto y diálogo con las naturalezas.
3. Luchas frente a la minería de carbón y de otro tipo por su impacto en el clima, y por ser altamente consumidoras de combustibles fósiles.
4. Pasos firmes hacia un debate sobre el tipo de energías que se requiere, para qué, para quién, cuánto y sobre el ejercicio de la soberanía de los pueblos y territorios.
5. Rechazo a los mecanismos como el mercado de Carbono, REDD+ y otros, ya que son falsas soluciones al cambio climático.
6. Compromisos claros para la no extracción y emancipación de combustibles fósiles por parte de los pueblos.

Herramientas de avance

Protección de pueblos y territorios:

- Detener la criminalización de quienes promueven el dejar el petróleo, el gas o el carbón en el subsuelo, y de quienes son activos defensores de las tierras y territorios frente a la extracción de hidrocarburos fósiles.
- Detener la intervención de corporaciones, de los sistemas de represión de los Estados y la ocupación e invasión de territorios para la extracción de hidrocarburos fósiles en lugares en donde la población local la rechace, áreas designadas como reservas naturales o de alta fragilidad.

Llamado internacional ¡Es el tiempo de los compromisos desde los pueblos!

OILWATCH sostiene que ningún país realmente está listo para soportar un cambio climático catastrófico. Además, las naciones que sufren las peores consecuencias son las que contribuyen menos al calentamiento global, pero a menudo sí son las que más toman medidas para frenar el mismo. Creemos que **ha llegado el momento para que las Naciones Unidas enfrenten la crisis climática creando, en el seno de la Convención de Cambio Climático, el Anexo 0 como grupo de pueblos o naciones que son reconocidas por sus contribuciones y como un incentivo para que otros se unan a la tarea de dejar en el subsuelo los hidrocarburos fósiles.**

Basta de hablar de cosas abstractas como emisiones de CO2, hablemos de petróleo, de gas o de carbón. Sumémonos a los compromisos de los pueblos de no extraer más hidrocarburos fósiles y hagamos esfuerzos en nuestras organizaciones apoyando estas iniciativas y luchas de resistencia.

Demandamos a las Naciones Unidas, a los gobiernos nacionales y a las organizaciones y movimientos sociales el reconocimiento, protección y difusión de los compromisos y esfuerzos verdaderos que contribuyen certeramente para evitar el desastre climático.

Reconocimiento a través del establecimiento de un premio internacional:

- para quienes dan pasos firmes para no extraer hidrocarburos de sus tierras y territorios.
- para quienes mantengan modelos de soberanía energética y alimentaria no dependientes de los combustibles fósiles y respetuosos de la naturaleza.

Incentivos tales como:

- intercambios tecnológicos
- formas de contribución y apoyo directos, respetando las soberanías, con diálogos de buena fe y sin traslado de responsabilidades.

Desincentivos tales como:

- retiro de subsidios estatales a la industria relacionada con los hidrocarburos fósiles.
- retiro de inversiones (*divest* en inglés) en acciones, bonos o fondos de inversión vinculados al petróleo.

OILWATCH/ Julio de 2015

Venezuela

Extractivismo y agotamiento del rentismo petrolero

Tras la consolidación del bloque chavista a mediados de la década pasada, Venezuela vivió una oleada de modernización y expansión del modelo de petro-Estado desarrollista y sus males endémicos. Este avance sin precedentes de la frontera extractiva, muestra en la actualidad las nuevas y viejas alternativas políticas que conviven en la Revolución Bolivariana. Por un lado las estructuras del antiguo modelo petrolero y, por el otro, diversas experiencias que buscan configurar un modelo más allá del rentismo.

Por Emiliano Teran Mantovani*

En la segunda mitad de la década del '70 Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los fundadores de la OPEP y muy importante político de la historia petrolera venezolana, advertía, en plena euforia del *boom* de los precios internacionales del crudo, el futuro colapso del modelo rentista nacional. Tildado en numerosas ocasiones de loco, denunciaba las nefastas consecuencias del “soñado desarrollismo” petrolero y la “completa paranoia de grandeza” que se desprendía de esta ilusión de riqueza. Insistía en los paradójicos efectos de una inundación de divisas, lo que en la época sería llamado el *Efecto Venezuela*, y en el sobredimensionamiento de los males endémicos del nuestro capitalismo rentístico.

El llamado *Viernes Negro* de 1983 -la gran devaluación del bolívar frente al dólar-, la crisis de la deuda y el enorme estallido social

que desbordó políticamente al status quo en el país en 1989, conocido como Caracazo, daban la razón al “profeta olvidado”. Hoy en día en Venezuela sus predicciones recorren, como fantasmas, los debates y horizontes políticos nacionales, encendidos por la crisis que se vive en el país.

El petro-Estado desarrollista

A pesar del colapso del modelo rentista en la década de los '80, las huellas de la drástica transformación que sufrieron las frágiles estructuras sociopolíticas venezolanas con la implantación del modelo petrolero, y la constitución de un imaginario social de “progreso”, modernidad, riqueza y emancipación nacional en torno al crudo, siguen rigiendo las formas de lo político en el país. La aparición de Hugo Chávez en la década

de los años '90 no sólo responde al incumplimiento de esta particular promesa de “desarrollo” para la sociedad, sino que también representa su recuperación, con una serie de importantes reformulaciones.

La apuesta política inicial de Chávez era clara: **un proyecto nacional que contrarrestara al modelo neoliberal desnacionalizador y recuperara el papel del Estado desarrollista petrolero**. En este sentido, era esencial una administración nacional-estatal del extractivismo, con el fin de mejorar las condiciones sociales de los más desfavorecidos e impulsar un proyecto político, que ahora sí llevaría a Venezuela al “desarrollo”. Para esto en los primeros años centra su atención en la recuperación de los deprimidos precios del petróleo y de los dominios políticos nacionales sobre la actividad general -resalta la *Ley Orgánica de Hidrocarburos* de 2001. Además prioriza una propuesta de política distributiva de la renta prudente y racional, antes que la búsqueda de expansión de proyectos para aumentar las cuotas extractivas, modelo que se modificará a partir de 2004.

El período que va de 1999 a 2004 se desenvuelve en medio de una intensa disputa por la hegemonía política entre el Gobierno de Chávez y su alianza popular y las viejas coaliciones de poder del país (como FEDECÁMARAS, grandes tenedores de tierra, élites tecnocráticas en PDVSA y partidos tradicionales, entre otros); las políticas oficiales estaban tocando los intereses de estos poderosos sectores. Destacan aquí, el golpe de Estado de 2002, el Paro Petrolero 2002-2003, los cortes de ruta derechistas (*guarimbas*) y el referéndum revocatorio en 2004.

El triunfo del bloque nacional-popular del chavismo permite la configuración de su hegemonía política en el país, logrando imponerse en el seno de la institucionalidad estatal y de la industria petrolera, estableciendo la progresiva consolidación y fortalecimiento del *petro-Estado* desarrollista. Se abre así una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. **A partir de 2004, comienza a configurarse un redimensionamiento no sólo de la política petrolera nacional sino de toda la política extractiva en general**. En este sentido, se proponen nuevos planes de expansión -el *Plan Siembra Petrolera*- que suponen grandes inversiones y ponen en el centro de la escena política un territorio emblemático de la historia petrolera venezolana: *la Faja Petrolífera del Orinoco* (FPO).

Potencia energética

La avasallante victoria de Chávez en las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 formaliza el devenir de este ciclo hegemónico e inaugura la estructura narrativa y programática del extractivismo de este período (2007-actualidad): la Venezuela *Potencia Energética Mundial* y el Socialismo del Siglo XXI. En el marco del gobierno reelecto **comienza a configurarse una expansión y robustecimiento de las estructuras que componen al fortalecido petro-Estado**. Una extensión de formas corporativas que van a tener incidencia determinante en los diversos ámbitos de la vida social, donde destaca una relación que se hace cada vez más burocrática entre el Estado y la base popular organizada que lo apoya.

El auge de la demanda y de los precios de las materias primas, a partir del crecimiento de China y de los BRICS en general, desde 2004 hasta 2008, **supuso la captación de una cuantiosa renta por parte del Estado** y, por ende, la ampliación del margen de maniobra política para los dirigentes gubernamentales. La propuesta de los dos últimos planes de desarrollo de la nación (2007-2013 y 2013-2019), en nombre de la “felicidad social”, la “independencia nacional” y salir del modelo

rentista, proyectan duplicar la “producción” de tres a seis millones de barriles diarios de crudo para el año 2019 -cuatro millones provendrían de la FPO. A esto se le suman los planes de expansión minera para el país, donde destaca una faja que se encuentra al sur del río Orinoco, denominada Arco Minero de Guayana, y que se convierte en objetivo estratégico del enfoque económico del Gobierno Bolivariano.

Este nuevo horizonte extractivista repotenciado propone cuotas de extracción sin precedentes en la historia de Venezuela¹. A contrapelo no sólo de lo que se planteara al inicio del gobierno de Chávez sino también del marco de las discusiones latinoamericanas sobre cómo salir de estos modelos extractivos y apuntar al Socialismo del siglo XXI y el *Buen Vivir*; e incluso de los llamados de atención globales ante la gravedad de la crisis ambiental planetaria.

La Revolución Bolivariana es un proceso histórico en el cual han convergido factores de creación y producción de formas novedosas de lo político en el país, junto con esquemas, formatos y estructuras del viejo modelo rentista petrolero. Como forma de justificación de este extractivismo 2.0, se ha recurrido a la vieja mitología política venezolana que se imbricó con la extracción petrolera desde principios del siglo pasado: la idea de “progreso”, el proyecto inconcluso de Bolívar y la misión del Estado de cumplirla, junto con el imaginario de riqueza a partir del petróleo.

El tercer impacto del Efecto Venezuela

La crisis económica global que se desarrolla desde 2008 -que tiene su correlato en el patrón energético mundial y se expresa en sendos derrumbes del precio internacional del crudo, en 2009 y 2015-, va a tener un notable impacto en los procesos de transformación social de la Revolución Bolivariana. Esto se expresa no sólo en una ralentización y estancamiento de los mismos, junto con una merma de la capacidad auto-financiadora que tenía el petro-Estado para su proyecto de modernización expansiva, sino también notables desajustes en la dinámica de acumulación y distribución en la economía nacional.

La caída de los precios del crudo hacen más visibles los factores históricos de vulnerabilidad del capitalismo rentístico nacional, determinados por los ciclos de las materias primas. Estamos ante el *tercer impacto del Efecto Venezuela* -el originario, en la década del 20, y el segundo, en la de los 70-, que ha contribuido a una notable reconfiguración metabólica del ordenamiento nacional y a una severa profundización de los desequilibrios económicos propios del modelo rentista. Esto se está traduciendo en balances económicos estatales notablemente deficitarios. Al respecto es necesario resaltar que:

a) el principal sostén financiero de Venezuela, a partir de esta crisis, es China, la cual hasta ahora ha otorgado más de **US\$ 46 mil millones en préstamos, pagaderos con petróleo**. Esto implica que un porcentaje de la producción nacional se destina para pagar dichos préstamos y **esta reposición financiera se respalda en la naturaleza “rentable”** que comprende el territorio nacional, en el extractivismo a futuro;

b) más allá de los factores coyunturales que determinan la dinámica de la crisis en la actualidad, desde hace unos 30-40 años (con el *Viernes Negro* como clara referencia), los pilares de la sociedad rentista venezolana comenzaron a resquebrajarse, iniciando un período de desequilibrios estructurales

que, con grados de severidad variables, se ha mantenido permanentemente hasta nuestros días. Luego de casi 100 años del inicio de la explotación masiva de petróleo en el país, **el modelo capitalista rentista muestra claros síntomas de agotamiento estructural**, y, a nuestro juicio, es insostenible en el tiempo. El tercer impacto del Efecto Venezuela se desarrolla sobre este proceso histórico;

c) sin embargo, esta situación crítica no responde sólo a un problema de gestión política, o de estructuras caducas. Las actuales formas de caotización del orden sociopolítico y económico venezolano -desquiciamiento de la economía, metástasis de la corrupción, generalización de diversas formas de violencia, ampliación de redes informales de poder territorial, entre otras- también están muy vinculadas con los diversos dispositivos de *guerra de baja intensidad* que se desarrollan en el país, en el marco de intensas disputas geopolíticas en todo el planeta entre el bloque global de los EE.UU.-UE, por un lado, y el de China y Rusia, por el otro. Recordemos la Orden Ejecutiva de Obama de fecha 9/03/2015 donde señala a Venezuela como una “amenaza inusual para su seguridad interna”.

Estos dispositivos bélicos no pueden ser leídos únicamente como una confrontación gobierno-oposición, dado que existen diversos entramados que operan y se conectan con sectores de lo público. Hay numerosos actores implicados, y estos



Foto Radio Nacional de Venezuela

La idea de ser una *Potencia Energética Mundial* está emparentada históricamente con lo que ofrecieran en períodos de bonanza petrolera mundial Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) -*Venezuela como primera potencia económica de América Latina*- y Carlos Andrés Pérez (1974-1979) -*la Gran Venezuela*. **La última oleada de modernización y de expansión del capitalismo rentístico (2004-2014) se ha traducido en una agudización de los males endémicos del modelo rentista extractivista.** Dentro de esto podemos destacar una reprimarización de la economía; la corporatización de la organización popular; configuración de nuevos grupos de poder transnacionalizado alrededor de la captación y distribución de la renta; ampliación de la devastación ambiental y amenaza a la vida de los pueblos indígenas; además de una dependencia y vulnerabilidad sistémica, cuya expresión más sensible se encuentra en el campo alimentario.

disputan territorio rural y urbano, generando diversas formas de economía -en el marco de la llamada “guerra económica”-; se apropian de bienes comunes, permean instituciones sociales y públicas², y atraviesan los propios imaginarios y subjetividades sociales, creando nuevas identificaciones políticas y sociabilidades que atentan contra el tejido social configurado en la Revolución Bolivariana.

En los últimos años, las disputas políticas en Venezuela han estado muy permeadas por operaciones masivas de extracción de bienes de consumo, e incluso de producción, en formas de contrabando, que en buena medida están motorizados por grupos delincuenciales. Según el presidente Nicolás Maduro “entre 30% y 40% de los productos del mercado nacional son desviados a Colombia por el contrabando” (El Universal, 12/08/2014), y quien fuera vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, afirmaba que el contrabando de gasolina a Colombia se traducía en una pérdida para el Estado de 100 mil barriles diarios de petróleo (Venezolana de Televisión, 16/12/2013).

La creciente estructuración de redes delincuenciales ha tenido un severo impacto en los circuitos económicos del capitalismo rentístico nacional, en la medida en la que intensifica la necesidad de divisas y productos importados propia del modelo rentista, lo cual presiona al Estado a un mayor endeudamiento externo para solventar los déficits, al aumento de sus cuotas extractivas (en la FPO, en minería), y/o a la flexibilización de las políticas petroleras nacionalistas y de su soberanía territorial respecto a las empresas multinacionales.

En general estos fenómenos a escala nacional se han agudizado a partir de la muerte del presidente Chávez en 2013, abriendo un período de gran incertidumbre, que plantea las dudas sobre la posibilidad de mantener los niveles de acumulación creciente para responder al nuevo salto modernizador y a las expectativas de vida que se han configurado en su seno. Esto le exige al Estado un gasto público y una inversión social en expansión que no parece poder sostener en el tiempo bajo estas condiciones.

Horizontes

Un complejo período de crisis e incertidumbre como los que se viven en el país debe también ser reconocido como tiempos de oportunidades para construir alternativas radicalmente diferentes a los modos de vida configurados históricamente en el capitalismo rentístico nacional. Pero esto no ocurre por inercia, sino brota y se expande a partir de las luchas sociales desde abajo. Mismas luchas que constituyeron el escenario de la Revolución Bolivariana, desde el Caracazo en 1989 hasta la victoria política sobre la oposición en 2004.

Dada la intensificación de las disputas políticas internas, la disfuncionalidad del modelo rentista petrolero, y la sensación generalizada de pérdida de referentes políticos en el país, se ha generado un nuevo escenario productivo, desde abajo, a partir de debates, prácticas y experimentaciones que impulsan formas cooperativo-populares en el campo de las organizaciones sociales, que ganan fuerza propia e intentan pensarse más allá del gobierno nacional, pero que además persiguen configurarse un entorno de subsistencia y autogestión. Estas formas, poco articuladas entre sí, probablemente vulnerables, y solapadas por los discursos oficiales y de los partidos políticos de la oposición nacional, existen y representan una potencia política con una historia de lucha reciente de las que, a nuestro juicio, se desprenden mayores niveles de definición y conciencia.

Representan no sólo una posibilidad de resistencia ante fuerzas

restauradoras, sino la forma social que puede configurar un modelo más allá del capitalismo rentístico. Quedan abiertas múltiples interrogantes, como la de la posibilidad de reconfiguración de un proyecto popular contrahegemónico de amplia escala. Probablemente vendrán situaciones que pondrán a prueba la fortaleza de estos tejidos comunitarios.

**Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Venezuela) y hace parte de Oilwatch Latinoamérica.*

1. A pesar de la meta de alcanzar los 6 millones de barriles diarios para 2019 o 2021 parece tremendamente cuesta arriba, desde que se “nacionalizó” la FPO en 2007, las cuotas de extracción en este territorio han aumentado de 513.000 b/d a 1.429.600 para 2014. El “potencial de producción de crudo” en Venezuela sigue estando alrededor de los 3 millones barriles diarios (3.296.900 en 2014). (PDVSA, s/d y PDVSA, 2014: 45).

2. Por ejemplo, a principios de febrero detuvieron al director ejecutivo de Producción de PDVSA Occidente, vinculado a diversos hechos de corrupción, entre ellos el contrabando de gasolina hacia Colombia; y a fines de marzo, PDVSA anunciaba que un grupo comando armado sabotó instalaciones petroleras en Monagas (Últimas Noticias, 02/02/2015 y Correo del Orinoco, 15/03/2015).

Fuentes consultadas

Banco Central de Venezuela. Informe Económico 2012.

Correo del Orinoco, 29/03/2015. Grupo comando armado sabotó instalaciones petroleras de PDVSA en Monagas.

El Universal, 20/04/2015. Venezuela recibe 5.000 millones de dólares por préstamo de China.

— (12/08/2014). “Maduro: Entre 30% y 40% de productos del mercado nacional son desviados.”

FAO (2014). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe.

PDVSA (s/d). Empresas Mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco. Sitio web oficial.

— (2014). Informe de gestión anual 2014.

Últimas Noticias (02/02/2015). Detienen a director ejecutivo de Producción de Pdvsa Occidente por corrupción.

Venezolana de Televisión (16/12/2013). Rafael Ramírez: El precio de la gasolina es una discusión que tenemos que dar.

Brasil

Expansión del presal y soberanía territorial

El descubrimiento de grandes reservas de hidrocarburos a más 7 mil metros bajo el nivel del mar movilizó al gobierno brasileño a desarrollar la extracción en aguas profundas. Una década después, y tras grandes inversiones públicas y alianzas transnacionales, el gigante sudamericano enfrenta las secuelas del cóctel extractivista: violación de derechos colectivos, debilitamiento de la legislación, precarización laboral, racismo ambiental y corrupción. Mucha corrupción.

Por Marcelo Calazans, Tamra Gilbertson y Daniela Meirelles*
Traducción: Nancy Viviana Piñeiro



Foto Ricardo Stuckert

En 2005 Petrobras descubrió hidrocarburos frente a las costas de Río de Janeiro bajo formaciones salinas del campo *offshore* Tupi. Al año siguiente un consorcio compuesto por la compañía brasileña, BG Group (Reino Unido) y Petrogal (Portugal) perforó el yacimiento y estimó su potencial entre los 5.000 y 8.000 millones de barriles de petróleo equivalente (Flávia Gouveia, 2015). Tras nuevas exploraciones se encontraron depósitos de hidrocarburos en la capa presalina que se extiende a lo largo de las cuencas Santos, Campos y Espírito Santo, en las costas de los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.

El petróleo y gas del presal se alojan a unos 7.000 metros bajo el nivel del mar: los cubren de 2.000 a 3.000 metros de agua, y una capa de roca y otra de sal de aproximadamente 2.000 metros de espesor cada una. Estas reservas son consideradas las fuentes de

Efectos del boom petrolero en Brasil

El gobierno brasileño y los principales actores de la industria petrolera quedaron sorprendidos por el descubrimiento de los yacimientos presalinos en 2006. Luego de meses de polémicas negociaciones, el 31 de agosto de 2009 el presidente Luiz Inácio *Lula* da Silva envió cuatro proyectos de ley al Congreso para proponer una transformación radical de la estructura regulatoria y operativa del sector hidrocarburífero. Las reformas asegurarían que un porcentaje del dinero del petróleo pudiera utilizarse en programas sociales. El gobierno, además, tendría una participación mayoritaria en una empresa semipública creada para la explotación del presal.

Por su parte Petrobras y el gobierno, a través de una masiva campaña publicitaria, proyectaron las reservas presalinas en 28.000, 35.000 y 50.000 millones de barriles. La posibilidad de edificar un *Estado benefactor* se agitó frente a los ciudadanos con promesas de salud



Fotos: izq. Ricardo Stuckert;
der. Manu Dias

energía extrema más importantes de la actualidad; y las de mayor profundidad se encuentran a lo largo de las costas de África occidental y Brasil. Como referencia, vale destacar que la Agencia de Información Energética considera perforación ultra-profunda en el Golfo de México a aquellas que se realizan a 1.500 metros o más (The Nation, 13/03/2012).

Dadas estas características, y que además se hallan a unos 300 km de la costa, donde prevalecen las condiciones oceánicas severas, se requieren grandes inversiones para acceder a los yacimientos. La gran profundidad y presión que supone la extracción también plantea importantes dificultades tecnológicas que deben superarse recurriendo a una amplia variedad de especialistas, equipamiento de alta tecnología e infraestructura (Beltrão et al., 2009). Altos riesgos de extracción que también se traducen en graves impactos ambientales y sociales (BBC News, 12/04/2015).

pública, educación, vivienda, saneamiento y reforma agraria que serían *garantizadas* gracias al nuevo poder petrolero y las regalías. El argumento parecía seguir la lógica de que, de no ser por el petróleo, los gobiernos nunca podrían garantizar derechos a toda la población. Se invisibilizaba, además, que este avance implicaría quitarle derechos a algunos, es decir, a trabajadores precarizados, a la Naturaleza y a quienes habitan en las inmediaciones de los grandes proyectos. Una injusticia ambiental violenta y unilateral.

A partir del descubrimiento de los recursos *offshore* en Espírito Santo en 2006, las inversiones más importantes de los gobiernos de *Lula* y *Dilma* han estado

concentradas en hidrocarburos. Por ejemplo, el *Plan Decenal de Energía* es una inversión de US\$ 97 000 millones, de los cuales el 70,6% está destinado al sector de petróleo y gas; el 22,5%, al de electricidad; y el 7%, a los biocombustibles. Mientras que Petrobras recibió inversiones por US\$220 mil millones, según su Plan de Negocios 2014-2018 (Apex Brasil, 2014). En tanto los Planes de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2) del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión y el *Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico* (BNDES) dirigieron inversiones a proyectos tales como: construcción de puertos, astilleros, ductos, refinerías, plantas de fertilizantes e instalaciones logísticas, tanto en tierra como mar adentro. Esta infraestructura de gran escala se implementó a ritmo acelerado, con altos riesgos y sin reparar en costos. Se desarrolló así un *boom* petrolero: si en el año 2000 el sector hidrocarburífero representaba el 3% del PBI brasileño; 13 años después llegaba al 13%, tras los gobiernos de Lula (2003-2006 a 2007-2010) y el primer mandato de Dilma Rousseff (2011-2014).

La concesión de nuevos bloques exploratorios -incluidos los de lutitas- estuvo suspendida entre el 2008 y 2013 debido a que las leyes de regalías existentes pusieron de relieve el frágil pacto federal brasileño entre los estados considerados *productores* de petróleo y los *no productores*. Durante el debate por las leyes de regalías se pudo ver a las autoridades de los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y São Paulo, donde se encuentra la mayor concentración del PBI y del petróleo presalino, pelearse por mantener sus regalías en calidad de *productores*. Las autoridades de estos estados argumentaron que necesitaban el dinero para pagar las innumerables consecuencias sociales y ambientales vinculadas a la exploración petrolera: contaminación, derrames, aumento de la población en ciudades pequeñas y medianas y destrucción de los ecosistemas marinos, por nombrar apenas algunas. Eran muy conscientes de los riesgos propios de un estado petrolero.

Por otra parte, las alianzas políticas del gobierno del PT con los sectores más conservadores, tanto en el Parlamento como en la composición de los ministerios, repercutieron en un debilitamiento de los códigos forestal y minero y en la aplicación de la legislación ambiental. Al mismo tiempo, impidieron tanto la implementación de los derechos territoriales de pueblos indígenas y tradicionales, como así también de pescadores, *quilombolas*¹ y de los trabajadores de las plataformas petroleras, que se encuentran tercerizados y precarizados.² Esta flexibilización se da por la influencia de intereses corporativos, sobornos y corrupción política, en un juego de acciones partidarias y corporativas que forman parte del pacto de poder sellado por las elites más importantes, entre ellas: Odebrecht, Camargo Correa, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez.

Petróleo y corrupción

Si bien el Gobierno afirma que la industria petrolera aún puede ser redituable con un barril a US\$ 45, Petrobras ha lanzado un Plan de Desinversión. Este incluye la venta de activos, como fábricas de fertilizantes; reducción de inversiones en puertos y refinerías; y la retirada de otros países para concentrarse aun más en la exploración de petróleo y gas en territorio brasileño.

Incluso en medio de la crisis desatada por la baja del crudo, de US\$ 115 en junio de 2014 a US\$ 48 en enero de 2015, la extracción de hidrocarburos en Brasil siguió batiendo récords y alcanzó los 3 millones de barriles de petróleo equivalente por día en el primer mes de este año, de los cuales el 27% se obtiene del *offshore* presalino (800 000 bpd). Por otra parte, la caída del precio del petróleo coincidió con una profunda crisis del pacto de poder hegemónico sellado desde el comienzo del

¡Ni un pozo más! ¡Por el derecho a decir 'no'!

Gracias a la vinculación de redes nacionales y regionales relacionadas a injusticias y conflictos socioambientales asociados a la industria del petróleo y el gas ha surgido un importante debate y campaña estratégica: ¡Ni un pozo más! ¡Por el derecho a decir 'no'! Estas consignas se articulan con las campañas por los derechos de los territorios de pesca, indígenas y *quilombolas*, y por alimentos libres de plaguicidas. ¡Ni un pozo más! no significa que aquí y ahora se dejará de utilizar el petróleo y el gas, es decir, no implica la inmediata pérdida de empleo para los trabajadores de la cadena petrolera. ¡Ni un pozo más! es, en realidad, un pedido estratégico contra el avance de la expansión, para reflexionar sobre la necesidad urgente de reducir, y seleccionar con mayor cuidado, el uso de combustibles fósiles en pos de la justicia ambiental y climática.

¡Por el derecho a decir 'no'! va al núcleo del debate sobre el consentimiento previo e informado, después de todo, no tiene ningún sentido tener derecho al consentimiento previo e informado sin el derecho a decir 'no'. Una nueva sociedad y un nuevo modelo energético sólo serán posibles si logramos detener la expansión descontrolada de la 'civilización' petrolera. No habrá transición energética sin un alejamiento del modelo basado en el petróleo.

Gobierno de Lula, en 2003. Tras nueve años de *boom* petrolero ocurrió lo inevitable: corrupción, malversación de fondos y mentiras. Justo antes de la elección de Dilma, investigadores de la Policía Federal de Brasil lanzaron la Operación *Lava Jato*, que descubrió el esquema de lavado de dinero con el que se habrían movilizado más de US\$ 3.500 millones. El acto de corrupción más grande del país, que incluyó el financiamiento de partidos políticos por parte de los más importantes contratistas petroleros y Petrobras (Ministério Público Federal, 2015). Las complejas transacciones financieras de las que participan grupos subcartelizados y organizaciones políticas en un laberinto partidario se dan en las actividades de explotación del petróleo costa adentro y costa afuera, así como en la prospección sísmica, perforación de nuevos pozos, instalación de ductos,

terminales de petróleo y gas, construcción de puertos y astilleros y ocupación de extensas áreas de tierra.

El descontento con las políticas brasileñas creció en marzo de 2015, hasta culminar en las protestas contra la corrupción gubernamental, protagonizadas por millones de personas en las calles. El Gobierno de Rousseff resultó fuertemente golpeado por la derecha, y la sociedad brasileña cayó en un debate complejo que enfrentó a la derecha con el *Partido Progressista* de Dilma (Financial Times, 16/03/2015).



Foto Agência Petrobras

Soberanía nacional versus soberanía territorial

Por su ubicación y su abundancia en recursos naturales, Espírito Santo es una de las regiones más importantes del país en términos de exportación de productos de pasta de celulosa, hierro, mármol y granito. Desde el primer gobierno de Lula cientos de compañías relacionadas con el sector de petróleo y gas han invadido el estado con el apoyo financiero del BNDES, el PAC 1 y 2 y compañías como Petrobras, Stat Oil, Shell, Total, Chevron y Jurong.

Por tratarse de una región devastada por las consecuencias de una economía de exportación y por la industrialización, el descubrimiento del segundo yacimiento más grande de petróleo presalino despertó sentimientos contradictorios en la población. Por un lado, el Estado alienta la industria petrolera ofreciendo nuevos bloques exploratorios, dando prioridad al sector hidrocarburífero en lo que respecta a políticas energéticas, desconociendo derechos territoriales, acelerando el otorgamiento de licencias sin estudios previos adecuados y manipulando continuamente el proceso de consulta. Por el otro, a lo largo de la costa atlántica, en el norte de Espírito Santo, la extracción de petróleo devasta grandes extensiones de bosque de Mata Atlántica y de la biodiversidad marina. La expansión extractiva convierte a los territorios de pesca y las tierras de *quilombolas*, campesinos, pueblos indígenas y pequeños distritos urbanos en *zonas de sacrificio*. Se destruyen las condiciones de vida de los habitantes locales, al tiempo que se expulsa, se persigue y crimi-

naliza la resistencia (Gilbertson y Calazans, 2013).

Hay una exacerbación del **racismo ambiental** predominante en la zona y de la violencia policial, que suele accionar en conjunto con milicias privadas, como ha sucedido en el emblemático caso de los asesinatos de pescadores de la Asociación de Hombres de Mar (AHOMAR), en conflicto con Petrobras, en la Bahía de Guanabara, Río de Janeiro. Por otra parte, las ciudades y distritos que han convivido con la industria petrolera durante décadas, como el norte de Río de Janeiro y Bahía, demuestran claramente que la renta petrolera no se distribuye de manera equitativa en la sociedad sino que ha generado una elite local que concentra la riqueza y el poder. La población no tiene derecho de decir 'no' ante la expansión descontrolada de nuevos bloques petroleros y pozos exploratorios. Expansión que se lleva a cabo en nombre de la soberanía nacional pero sin respetar la soberanía territorial.

* Marcelo Calazans es director de FASE-ES, Brasil; Tamra Gilbertson es codirectora de Carbon Trade Watch; y Daniela Meirelles es investigadora de FASE-ES, Brasil. La versión original de este artículo fue publicada en inglés bajo el título *Brazilian pre-salt expansion: corruption and the petroleum industry*. La traducción fue realizada por Nancy Viviana Piñeiro nvpmoreno.trad@gmail.com y la edición por OPSur.

1. *Quilombolas* son los actuales habitantes de comunidades negras rurales formadas por descendientes de africanos esclavizados, que viven, en su mayoría, de la agricultura de subsistencia en tierras donadas, compradas u ocupadas hace bastante tiempo.

2. Los trabajadores petroleros arriesgan su vida en las plataformas *offshore*. Son muy comunes las explosiones y las fallas en los equipos. Por ejemplo, en febrero de 2015 nueve personas murieron frente a las costas de Aracruz, Espírito Santo, a causa de una explosión en la plataforma tipo FPSO (Maritime Executive, 03/03/2015). Los trabajadores padecen las consecuencias de las malas condiciones laborales, las irregularidades y falta de mantenimiento en los equipos, las deficiencias normativas, la falta de aplicación de las leyes, entre otras.

Fuentes consultadas:

Apex Brasil (2014). Brazil: a huge oil and gas market at the tipping point for world renowned success. Agência Brasileira de Promoción de Exportaciones e Inversiones.

BBC News, 12/04/2015. Mass protest sweep through Brazil over oil giant Petrobras.

Beltrão, R. et al., (2009). Pre-Salt Santos Basin - Challenges and New Technologies for the Development of the Pre-Salt Cluster, Santos Basin, Brazil", OnePetro 19880-MS, Offshore Technology Conference, Houston Texas, 4 de mayo.

Gilbertson, T. y Calazans, M. (2013). Like oil and water: struggles against the Brazilian "green economy, Carbon Trade Watch y FASE-ES, noviembre.

Gouveia, F. (2015). Tecnologia nacional para extrair petróleo e gás do pré-sal, UNIEMP

Financial Times (Samantha Pearson y Aline Rocha), 16/03/2015. One million join anti-Rousseff protests in Brazil.

Ministério Público Federal (2015). Results of Operation Lava Jato. Consultado el 9 de mayo.

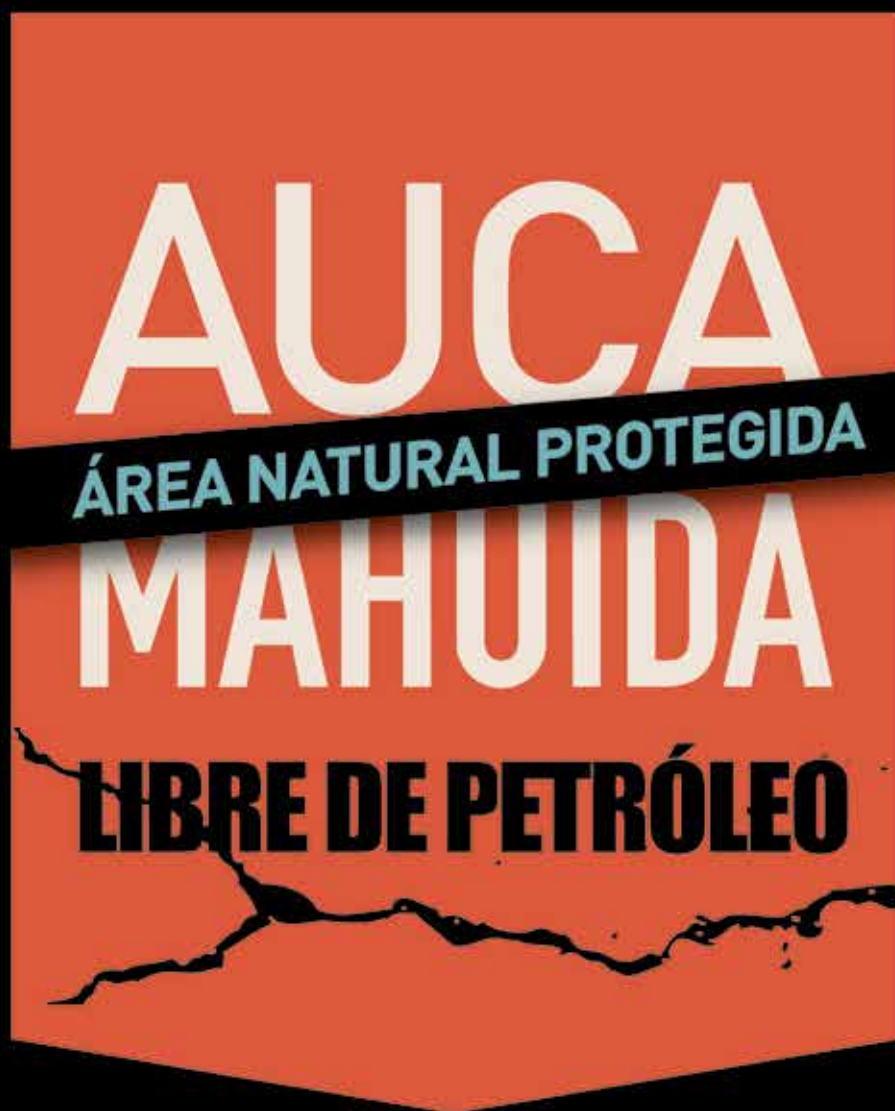
Maritime Executive (Wendy Laursen), 03/03/2015. FPSO blast: Last three bodies recovered.

Petrobras Magazine (2015). Oil and nature gas production in January.

The Nation (Michael T. Klare), 13/03/2012. Our new 'tough oil' world: why 21st century oil will break the bank - and the planet.



ARGENTINA LIBRE DE FRACKING



aucalibredepetroleo.org.ar

